



Brutal ofensiva del gobierno del PP contra las conquistas sociales

Hay que frenarla organizando una rebelión social

Editorial, pág. 2



Reforma laboral inminente

CONTRAPORTADA

Los dirigentes de CCOO y UGT firman con la CEOE un acuerdo lesivo para los intereses de los trabajadores

INTERNACIONAL

¿Guerra entre Irán y Estados Unidos?

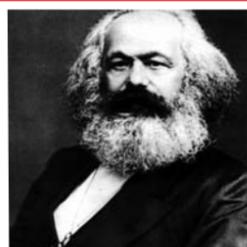
Brutal represión en Siria

págs. 3 y 4

TEORÍA

'El Capital' de Marx, por Federico Engels

PÁGINAS CENTRALES



SINDICAL

págs. 14 a 17

Astilleros en lucha
Transports Metropolitans de Barcelona en huelga
29 de febrero: Huelga en Castilla - La Mancha
Barcelona | Alba Luna readmitida gracias a la lucha
Girona | Por la readmisión de Ana Pozo

16 de febrero | Huelga de estudiantes valencianos: ¡paremos los recortes!

págs. 13 y 19

En defensa de la Memoria Histórica | Niños robados | Juicio Garzón | Muerte de Fraga

págs. 8 y 9

Brutal ofensiva del gobierno del PP contra las conquistas sociales Hay que frenarla organizando una rebelión social

En las últimas semanas el gobierno del PP está poniendo el pie en el acelerador de los ataques a la clase obrera. Como dijo claramente la propia portavoz del gobierno, las primeras medidas anunciadas en diciembre, como el recorte presupuestario de 8.900 millones de euros para los tres primeros meses del año, la congelación del Salario Mínimo (641 euros, uno de los más bajos de la UE), de los sueldos públicos (acompañada de incremento de la jornada laboral), la fuerte subida del IRPF (impuesto que descansa fundamentalmente sobre las rentas salariales), la restricción a la incorporación de más beneficiarios de la Ley de Dependencia o la subida del IBI, eran sólo el “inicio del inicio”.

Ataques en todos los frentes

A principio de enero Rajoy confirmó públicamente que el recorte presupuestario para 2012 ascendería a 40.000 millones de euros, lo cual es una auténtica declaración de guerra contra los trabajadores. En sintonía con el objetivo de poner en marcha recortes salvajes en todos los ámbitos de la administración, a finales de enero el gobierno aprobó el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla la “reforma exprés” de la constitución pactada con el PSOE en agosto, imponiendo el déficit cero a la administración central, a las autonomías y a los ayuntamientos. La ley empeora todavía más el pacto de pensiones alcanzado por los sindicatos y el gobierno del PSOE hace aproximadamente un año, ya que permitirá al gobierno anticipar su “revisión” en cualquier momento en caso de detectar “un déficit en el largo plazo”.

El 3 de febrero el gobierno ha aprobado una nueva reforma financiera que incluye la ampliación del capital público del FROB desde los 9.000 millones hasta 15.000 millones, mediante emisión de deuda. Este dinero se va a destinar, de nuevo, a “ayudar a la banca” en el proceso de absorciones que se está promoviendo, lo que constituye otro bocado que se llevarán los bancos a costa del dinero público.

La educación pública será otro punto de ataque fundamental. El ministro de Educación dijo textualmente que “la educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad” y ha emprendido medidas con el fin de segregar a los estudiantes a través de itinerarios, obligando a los jóvenes a elegir entre la universidad y la FP a los quince años.

El ministro de Justicia, Galladón, ha anunciado un brutal retroceso en la ley del aborto, de forma que no se permita el derecho al aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación y exigiendo el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar. También anunció el copago para determinados procedimientos judiciales y, en otros casos, su sustitución por procedimientos notariales, lo que implica la privatización de procedimientos legales hasta ahora gratuitos. Además, el gobierno quiere que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, reforzando todavía más en el blindaje de una casta privilegiada que actúa al margen de cualquier tipo de control social.

Para el 10 de febrero el gobierno tiene prevista una nueva reforma laboral, tan grave, que el propio Rajoy pronosticó que le iba a costar una huelga general, como quedó bien claro en su “desliz” de Bruselas.

Situación social insostenible

Estos ataques, que supondrán un retroceso de profundísimo calado en las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la po-



blación, se producen cuando la situación social de las familias obreras ya está sufriendo un grave deterioro, como consecuencia de la crisis y de los recortes que ya se vienen imponiendo desde las comunidades autónomas.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 el paro afecta ya a 5.273.600 personas, alcanzando la tasa de 22,8%. A los despidos que se suceden en el sector privado se suman ahora los derivados de la política de recortes de los servicios públicos. Efectivamente, en el último trimestre de 2012 se destruyeron 90.000 empleos públicos, sin que se haya detenido la sangría en la industria (50.000 empleos perdidos) o el llamado sector de servicios (305.000 empleos perdidos).

El número de familias en la que todos sus miembros están en paro supera el millón y medio y constituye el 9% del total de familias. Hay 149.800 hogares más en esta situación respecto al tercer trimestre. La mitad de los desempleados, 2,6 millones, llevan más de un año sin trabajar. La tasa de desempleo entre los menores de 25 años asciende al 48,5%. La factura social de la crisis capitalista es tremenda. Según una encuesta reciente de la Red Europea en Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) el número de personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social se sitúa en 11.666.827 personas, es decir, un 25% del total de la población.

La tendencia es que la situación se agrave todavía más. Efectivamente, en el último trimestre de 2011 se concentra la mitad del empleo destruido a lo largo del año. El Banco de España prevé que la destrucción de empleo permanezca por lo menos hasta la segunda mitad de 2013, periodo en el que se perderían otros 600.000 puestos de trabajo. Funcas prevé unas cifras similares. Ambos servicios de estudios calculan que en diciembre habrá unos 5,8 millones de parados. El cierre fulgurante de Spanair, con la desaparición de 2.000 empleos directos y otros 2.000 indirectos, es sintomático de la rapidez con la que la crisis puede abocar a los trabajadores a una situación de total incertidumbre.

Chantaje inaceptable

El gobierno del PP y los capitalistas repiten machaconamente que los recortes sociales y las “reformas estructurales” son la única vía para alcanzar mayores niveles de competitividad en el mercado internacional y ganarnos la “confianza de los mercados”, evitando así transitar el camino del Grecia, Irlanda o Portugal. Es decir, para evitar el rescate hay que adoptar por anticipado todas las

salvajes medidas ajuste que implicaría el rescate. Se trata de una falsa disyuntiva, de un chantaje burdo y descarado que los trabajadores no podemos aceptar.

Lamentablemente, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, que deberían contrarrestar con contundencia estos argumentos como primera condición para hacer frente a la ofensiva de los capitalistas, los aceptan en su esencia. El miedo al rescate y a la inestabilidad social y política, les lleva a actuar como “hombres de Estado”. Eso fue lo que les impulsó, hace aproximadamente un año, al pacto de las pensiones con el gobierno de Zapatero y, el pasado 25 de enero, a un infame acuerdo con la patronal, que supone una importante disminución de los salarios reales, más flexibilidad e indefensión de los trabajadores en las empresas, la posibilidad del “descuelgue” de los convenios colectivos y la dependencia de una parte de los salarios a los aumentos de la “productividad”. El retroceso firmado por los dirigentes sindicales es de tal magnitud que a Lezcano, portavoz de CCOO, le resultaba “incomprensible” la dureza de la reforma laboral anunciada por Rajoy. Lo que no entienden o no quieren reconocer los máximos dirigentes de CCOO y UGT es que la debilidad invita a la agresión, y que sus continuas concesiones a los capitalistas no establecen “límites” a los ataques sino que les anima a seguir adelante con ellos.

Objetivo de las medidas: saqueo puro y duro

Toda la crítica de los dirigentes sindicales a las medidas de la derecha se reduce al “ritmo” y la profundidad de los ajustes (o la falta de medidas de “reactivación”), o al hecho de que estos se impongan sin “consenso”. Señalan constantemente la incongruencia entre la profundidad de los recortes y el objetivo de crecimiento económico. Pero el objetivo de los capitalistas no es el crecimiento económico en abstracto, sino la preservación de sus propios intereses, es decir, de sus beneficios y la acumulación de riqueza. En un contexto de profunda crisis de sobreproducción como la que estamos viviendo, que se va a prolongar por un tiempo indeterminado, esto se consigue expulsando del sistema productivo a una parte importante de los trabajadores, recortando drásticamente sus conquistas sociales y laborales y privatizando los servicios públicos. Estas medidas no son, por supuesto, una solución al desempleo, ni a la crisis capitalista, pero son totalmente coherentes con los intereses capitalistas, particularmente del sector financiero y los grandes monopolios.

Algunos datos pueden aclarar bastantes cosas sobre las razones de los recortes y a quien beneficia. En 2011 el dinero de los presupuestos del Estado destinado a pagar el servicio de la deuda ascendió a la gigantesca cantidad de 74.000 millones de euros, de los cuales 27.500 corresponden a intereses y el resto a la amortización de la deuda. Si sumamos 9.000 millones de intereses que pagan las Comunidades Autónomas la sangría de dinero público por la deuda, que beneficia fundamentalmente a la banca, equivale al 10% del PIB. Estamos hablando de un verdadero lastre económico y social que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de las necesidades de la mayoría de la sociedad o del desarrollo económico. En 2012 la sangría será todavía mayor. La relación que este gasto tiene con los recortes sociales es evidente: se trata de saquear a los pobres para satisfacer a una ínfima minoría hipérrica. El agravamiento de la crisis (el Banco de España prevé una caída de un -1,5% para 2012, el FMI un -1,7%, pero la caída puede ser todavía más pronunciada) incrementará la presión de esa oligarquía para destruir todas las conquistas sociales de las últimas décadas.

Hay un camino para evitar la catástrofe capitalista

Hemos tenido en los últimos meses y días, continuos e incontestables pruebas de que hay ambiente para la lucha: todo lo que significó el movimiento 15-M, las recientes movilizaciones del profesorado en Madrid y otras comunidades, las recientes manifestaciones contra los recortes en Valencia y Catalunya, por hacer algunas menciones. Ahora bien, está claro que los recortes emprendidos por la burguesía sólo se podrán frenar dando un paso adelante, unificando la lucha, dotándola de una perspectiva de continuidad, en la que la clase obrera juegue un papel protagonista, y ligándola a un programa de transformación socialista de la sociedad. Los trabajadores y los jóvenes no sólo tenemos la fuerza para frenar los ataques, también tenemos la capacidad de dirigir la sociedad sin la necesidad de banqueros y empresarios, cuyos intereses y cuyo dominio sobre los mecanismos de creación de riqueza social, son la auténtica y única causa de la crisis.

Si los dirigentes sindicales actuales no están dispuestos a emprender el camino de la lucha, hay que obligarles, mediante la participación activa en la vida sindical, a que cambien de opinión, y caso en contrario hay que sustituirlos por nuevos dirigentes, ligados al sentir de los trabajadores en las fábricas y al verdadero ambiente de malestar y de rabia que vive el conjunto de nuestra clase. Es necesaria la convocatoria de una huelga general, pero evidentemente esta no puede ser concebida como una forma de “soltar presión” y volver por el camino de los pactos y consensos, como ocurrió después del 29-S. El objetivo de la huelga general tiene que ser dar la oportunidad a que la clase obrera de un puñetazo sobre la mesa que provoque una tremenda sacudida social y política, impulsando un movimiento ascendente y participativo y cada vez más masivo que eleve las protestas y el malestar a una verdadera rebelión social. Una rebelión que se filtre por todos los poros de la sociedad y que empuje a los trabajadores a ser conscientes de su verdadera fuerza, a controlar los medios de producción y establecer, mediante la nacionalización del sector financiero y la planificación democrática y socialista de la economía, las únicas condiciones realistas que pueden evitar la catástrofe social que supone el sistema capitalista.

¿Guerra entre Irán y Estados Unidos?

Yonie Moreno

Durante los últimos meses se ha recrudecido la presión del imperialismo norteamericano sobre Irán en una escalada de amenazas que pareciera podría desembocar en un conflicto armado entre los dos países. ¿Qué significa esta nueva ofensiva del imperialismo? ¿La Casa Blanca tiene el firme propósito de atacar Irán e incluso invadirla, o es solo un nuevo intento de amedrentar al gobierno iraní?

Nueva escalada de hostilidades

Esta nueva escala de hostilidades se recrudeció tras la aparición de un nuevo informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, en el cual se afirmaba que Irán estaba acelerando su programa de construcción de armas nucleares lo que supondría, según EEUU e Israel, una amenaza a la estabilidad de la región y a sus intereses.

No es accidental que el reinicio de las hostilidades contra Irán, tomando como base para la acusación principal la fabricación de armas atómicas, coincida con la salida norteamericana de Iraq. La retirada de este país de los últimos efectivos militares norteamericanos pone rúbrica al desastre que ha supuesto para el imperialismo norteamericano la aventura iraquí. Para conseguir salir de un avispero en el que se han dilapidado miles de millones de dólares y la vida de casi 4.000 soldados norteamericanos, el imperialismo tuvo que ahogar en país en sangre y atizar una guerra civil sectaria criminal entre la mayoría chiita del país y la minoría sunnita. La vieja política imperialista del *divide y vencerás*, aplicada desde los tiempos romanos, volvió a funcionar. Sobre la base de esa división sectaria el imperialismo consiguió crear las condiciones para abandonar el país, enfrentando a la población en líneas religiosas. Con ello contó, y este es uno de los precios que tuvo que pagar, con la ayuda inestimable del gobierno iraní, que apoyó y financió las milicias prochiitas. El resultado final de siete años de ocupación fue un gobierno con mayoría chiita donde Irán tiene una influencia decisiva. Es por ello que, ironías de la historia, la intervención imperialista en Iraq acabó fortaleciendo el régimen de los mulás de Teherán, enemigo histórico de EEUU en la zona.

Tras la salida norteamericana esas relaciones entre Irán e Iraq se han fortalecido. En el mes de enero de 2012 aconteció la visita del estado mayor del ejército iraquí a Teherán con el fin de fortalecer la cooperación militar y económica entre ambos países y la lucha contra grupos que ambas naciones consideran "terroristas" como la organización de izquierdas Muyahidin Jalk



(MKO) y los kurdos del Partido para una Vida Libre en el Kurdistán (PJAK). En las operaciones contra estos grupos, tropas iraníes cruzaron repetidas veces la frontera con el consentimiento del gobierno iraquí. Irán e Iraq han criticado toda posible intervención norteamericana en la zona y particularmente toda ingerencia exterior en Siria.

Sanciones económicas, sabotaje y terrorismo

El que Irán consiga un arma atómica que duda cabe que haría aumentar su peso militar en la zona reforzando su área de influencia. Sin embargo el arma atómica no es sino una excusa para el imperialismo norteamericano. Lo que de verdad está en juego es la lucha por áreas de influencia entre las diferentes potencias, en la que Irán aspira a convertirse en una potencia regional imperialista. Uno de los frentes de esa lucha se da ahora en Siria. La caída del régimen de Al Asad sería un golpe a la política exterior de Irán, perdiendo un aliado estratégico en la zona. Es por ello, que Irán y Rusia, por los mismos motivos estratégicos, se oponen a todo tipo de sanción internacional contra Siria, con la esperanza cada vez más vana de que el régimen sirio se pueda imponer por la violencia aplastando el alzamiento revolucionario.

Es por ello que EEUU lleva una guerra de baja intensidad contra Irán, a través de sanciones económicas, sabotaje y acciones terroristas. Las sanciones económicas impuestas a Irán en la última semana buscan estrangular su economía y doblegar al gobierno, que depende en un 85% de las exportaciones petroleras. La UE bajo la presión de EEUU "prohibió a todos los estados miembros suscribir nuevos acuerdos petroleros con Irán y dio hasta el primero de julio de este año para finalizar los contratos rubricados con anterioridad (...) Las sanciones contemplan acciones financieras contra el Banco Central iraní y la prohibición de exportar maquinaria y tecnología al sector petroquímico de ese país".¹

A esta guerra comercial se suman operaciones encubiertas en la jerga imperialista, o sea sabotaje y actos de terrorismo, que se ha concretado en el último año en el asesinato de tres físicos atómicos asociados al programa nuclear iraní. En julio pasado fue asesinado a tiros en Teherán el físico nuclear Dariussh Rezaie, y en diciembre de 2010 murió en un coche bomba el científico Majid Shahrari. El mismo día de este último atentado, otro experto en física nuclear, Feyrdoon Abbasi, resultó herido en un ataque de idénticas características y en enero de 2012, Mostafa Ahmadi Roshan fue asesinado mediante una explosión por bomba magnética adherida a su coche.²

Además de estos asesinatos también se han sucedido actos de sabotaje, como la explosión en noviembre de 2011 de un depósito de armas en una base de la Guardia Revolucionaria iraní, cerca de Teherán, que causó al menos 17 muertos y 16 heridos. Aunque el gobierno iraní calificó esta explosión de accidente, tiene todo el aspecto de tratarse de una acción de los servicios secretos israelíes o norteamericanos.³ Aunque Estados Unidos ha negado reiteradamente cualquier tipo de intervención e ingerencia en Irán, el derribo de un avión no tripulado (drone) el mes de diciembre pasado reveló como efectivamente EEUU esta interviniendo militarmente en Irán.

La pregunta es si esta escalada de hostilidades puede conducir a un conflicto abierto o un intento de invasión a Irán, tal como EEUU hizo con Iraq y Afganistán. De momento el mecanismo de la intimidación imperialista está en marcha. Ante las maniobras militares por parte del ejército iraní en enero de 2012 frente al estrecho de Ormuz, y la amenaza de cerrar, en caso de agresión, esta importante vía por la que circula el 40% del tráfico mundial marítimo, el imperialismo norteamericano respondió con el envío del portaaviones Abraham Lincoln al estrecho, dejando claro que no permitiría bajo ningún concepto el cierre del mismo.

En medio de estos movimientos de tropas y armamento, portavoces de la administración norteamericana están preparando a la opinión pública para justificar cualquier ataque a Irán, presentándolo como una amenaza militar para EEUU. Según informaba la agencia EFE el 31 de enero: "El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, en una sesión del Senado señaló que algunos líderes iraníes están más dispuestos a atacar EEUU, sus intereses o aliados. Clapper indicó en su testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado que 'algunos funcionarios iraníes han modificado sus cálculos y están más decididos a realizar un ataque contra Estados Unidos en respuesta a la amenaza real o percibida contra el régimen'. El director de inteligencia añadió que estos líderes iraníes estaba coordinándose con la banda mexicana de los zetas: para sazonar esta loca amalgama imperialista y darle mas credibilidad, la CIA podría haber añadido a la misma al nuevo líder de Corea del Norte Kim Jong-un."⁴

El imperialismo norteamericano, escalado tras las aventuras de Iraq y Afganistán

Tras las aventuras de Iraq y Afganistán el imperialismo norteamericano ha salido debilitado y no quiere volver a quemarse los dedos. Varios representantes de la administración Obama han expresado su oposición a otra aventura similar a la que se emprendió tras los atentados del 11 de septiembre y que ha durado cerca de una década. En 2011 el entonces secretario de Defensa, Robert

Gatesen, en un discurso a los estudiantes que se graduaban en West Point afirmó que "cualquier líder futuro que contemplara el envío de hombres y mujeres jóvenes a ocupar una sociedad de Oriente Medio 'debía examinarse la cabeza'⁵. Pese a las fuertes divisiones existentes en el seno de la clase dominante norteamericana, por ahora se impone el sector que, encabezado por Obama y Clinton, se opone a repetir conflictos a gran escala en Oriente Medio. Esto no obvia que el imperialismo quiera mantener el dominio de la zona, aunque por métodos que no impliquen gastos colosales como ocupar países.

Los argumentos más importantes en contra de nuevas aventuras militares para la burguesía norteamericana son la crisis económica y la enorme deuda que atena a el mundo árabe, dónde la revolución sigue profundizándose en Egipto y extendiéndose en Siria. Una agresión contra Irán podría estimular el movimiento antiimperialista en toda la zona. La situación de la economía norteamericana es tan grave que ha obligado a recortar el presupuesto militar. En los próximos cinco años Estados Unidos contará con menos soldados, cuyo monto disminuirá de 562.000, en la actualidad, a 490.000, al tiempo que los marines también decrecerán de 202.000 a 182.000. Por otra parte el Pentágono prevé reducir 259.000 millones de dólares en sus gastos en el próximo quinquenio y unos 487.000 millones en una década.⁶

Por todo lo anteriormente expuesto, si bien podemos asistir a choques de todo tipo, incluso armados entre EEUU e Irán, una invasión del país o una guerra a gran escala, está descartada a corto y medio plazo. El imperialismo está jugando de momento y por una temporada a la baza del desgaste económico, el sabotaje, la presión diplomática y la intimidación para doblegar a los iraníes.

Preparándose un nuevo episodio de la revolución iraní

Al gobierno iraní, por su parte, toda esta presión del imperialismo norteamericano le ayuda extraordinariamente a azuzar el sentimiento antiimperialista de las masas, manipulándolo a su favor. Estas agresiones ayudan a salvaguardar sus intereses desviando el enorme descontento contra el régimen que bulle por todo el país. En 2009 y 2010, la dictadura burguesa-clerical que gobierna el país desde hace 30 años fue sacudida por movilizaciones de masas contra el fraude electoral que dio como vencedor al actual presidente Ahmadineyad (las cuales fueron anticipo de la revolución árabe de 2011). Sobre la base de la represión y las debilidades políticas del propio movimiento, (sobre todo el hecho de no orientarse hacia la clase obrera) el gobierno iraní pudo aplastarlo momentáneamente. Durante décadas el gobierno iraní jugó con el miedo a la intervención imperialista para aglutinar a las masas entorno a s mismoí. Sin embargo, el estallido de la revolución árabe ha terminado con el aislamiento de las masas iraníes, creando las condiciones para que, más pronto que tarde, estalle un nuevo alzamiento de la población.



1. www.correodelorinoco.gob.ve/injerencia/iran-advierte-sobre-posible-cierre-estrecho-ormuz.
 2. internacional.elpais.com/internacional/2011/12/07/actualidad/1323282611_483434.html.
 3. internacional.elpais.com/internacional/2011/11/12/actualidad/132114589_392733.html.
 4. www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5j-ANTgYNG2mVU6XF-RBo_uLseIXw?do-cld=1706284.
 5. www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/01/120105_eeuu_reduccion_fuerzas_armadas_analisis_en.shtml.
 6. www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=472009&Itemid=1.

Juanjo López

Los acontecimientos en Siria se han acelerado en los últimos días. El 28 de enero la Liga Árabe suspendió su misión de “observación” y el 31 de enero el Consejo de Seguridad de la ONU discutía una resolución exigiendo la dimisión de Al-Asad. Mientras tanto, en Siria, la rebelión no sólo controla zonas enteras del país, sino que ha alcanzado los barrios periféricos de Damasco, hasta ahora férreamente controlada por el gobierno. La ONU calcula que ya han fallecido 5.400 personas víctimas de la represión brutal del gobierno.

La constante represión de los derechos democráticos en Siria, así como el empobrecimiento de amplios sectores de las masas víctimas de las políticas del FMI, preparaban las condiciones para que el país se uniera a la oleada de lucha revolucionaria que sacude todo el mundo árabe. Desde el 15 de marzo las masas sirias se han enfrentado a la dictadura policiaco-militar con gran valor y sacrificio. Su lucha es digna de admiración en todo el mundo. Hoy en día, zonas enteras del país están fuera del control del gobierno. Fuentes de Damasco han reconocido que se ven obligados a intervenir una y otra vez en las ciudades rebeldes incapaces de extinguir la protesta. El gobierno ha ofrecido reformas democráticas y liberar presos políticos pero nadie se lo cree. Al-Asad ha tratado desde el principio de combinar el palo y la zanahoria para ahogar en sangre la rebelión, sin embargo ha fracasado estrepitosamente.

En diciembre, por ejemplo, ante la llegada de los observadores de la Liga Árabe, las masas organizaron la “Huelga por la Dignidad”, que logró paralizar durante varios días gran parte del país, con manifestación en decenas de ciudades incluidas Damasco y Alepo, las dos principales ciudades de Siria que hasta entonces se habían mantenido muy alejadas del movimiento revolucionario. Sin embargo, el conflicto puede derivar en un escenario de guerra civil, sin descartar que finalmente intervenga el imperialismo de manera directa.

Quién es quién

Al calor de la lucha, las masas conformaron sus propias organizaciones de lucha y de combate, como por ejemplo los Comités de Coordinación Locales (CCL). Sin embargo, al no contar la revolución en Siria con una organización revolucionaria con raíces en el movimiento, inevitablemente las masas han puesto en un primer momento al frente de la lucha y de sus incipientes organizaciones a toda una capa de intelectuales, personalidades destacadas e incluso clérigos que habían mostrado en el pasado su rechazo al gobierno. Por supuesto estos elementos solo introducen confusión política, prejuicios y sectarismo. Son los mismos sectores sociales que en Libia entregaron la revolución a las manos del imperialismo.

Además, en el exterior, el imperialismo rápidamente ha conformado un Consejo Nacional Sirio (CNS), autoerigido como dirección de la revolución. El CNS, controlado política y financieramente por Arabia Saudí y el imperialismo norteamericano tiene como principal integrante a los Hermanos Musulmanes junto a las figuras del exilio sirio más vinculadas al capital financiero. Los Hermanos Musulmanes —fundamentalistas sunitas— se han convertido en Egipto en la principal herramienta contrarrevolucionaria del imperialismo. El CNS habla abiertamente de propiciar la “internacionalización” del conflicto, viendo con buenos ojos la intervención militar, sino de la OTAN, al menos de una fuerza “árabe”. Es significativo que Libia haya sido el primer país en reconocer la autoridad del CNS. Arabia Saudí también lo apoya y es probable que Túnez, Francia y Reino Unido también lo reconozcan en las próximas semanas.

Siria: la brutal represión no detiene el movimiento de las masas



El CNS no es la única fuerza opositora en el exilio pero sí es la que más proyección pública está consiguiendo. También se ha conformado el Comité Nacional por el Cambio Democrático (CNCD). A diferencia del CNS está compuesto fundamentalmente por antiguos militantes de partidos comunistas y nacionalistas. También parece contar con el apoyo de un sector de la minoría kurda (aunque éstos tienen sus propias organizaciones y reivindicaciones operando desde la zona kurda de Iraq). Sin embargo, no sólo también participan en el mismo clérigos reaccionarios, sino que llegó a coquetear con la CNS para formar una alianza, reconociendo la necesidad de una intervención militar “árabe”. El CNCD ha perdido apoyo en el interior porque basa su línea de acción en conseguir un acuerdo con Al-Asad para democratizar el país.

En el interior, además de los CCL destaca el Ejército Sirio Libre (ESL). Surgió en otoño a partir de la desertión de oficiales y soldados del ejército, sobre todo de origen sunita. Sus mandos dicen contar con 40.000 efectivos en aumento, aunque todo el mundo coincide en que se trata de una exageración propagandística. Aunque la desertión masiva es indicativa del estado de efervescencia revolucionaria del país, los mandos del ESL están controlados por el imperialismo: Reciben armas e instrucción militar de Turquía y han llegado a un acuerdo de colaboración con el CNS. Aunque el movimiento revolucionario les ha exigido repetidas veces que se limiten a proteger a los manifestantes y huelguistas de las bandas armadas del gobierno, han realizado ataques militares y guerrilleros y pretenden establecer “zonas liberadas” emulando a las milicias libias (y así forzar la intervención del imperialismo).

La debilidad política de la dirección del movimiento revolucionario es aprovechada por el gobierno. En el interior, la mayoría de los opositores rechazan la intervención imperialista en Siria y están en contra de cualquier división en líneas sectarias. Hasta ahora Al-Asad ha utilizado la intervención imperialista y la guerra civil en Libia para mantener una base de apoyo en las principales minorías del país: los alauitas, chiitas, drusos y cristianos. Cuando Al-Asad acusó a Al-Qaeda de los atentados terroristas en Damasco a finales de diciembre, sabía muy bien lo que hacía: aunque muy probablemente fueron atentados perpetrados por las propias fuerzas de seguridad del gobierno, el miedo al fundamentalismo sunita tiene una amplia base en un país de larga tradición laica y muy fragmentado en líneas religiosas y étnicas. Según encuestas patrocinadas por la Liga Árabe (y por tanto nada partidarias de Al-Asad), el apoyo al gobierno en diciembre se situaba en un 55% de la población.

No es la división religiosa de Siria lo que dificulta la caída de Al-Asad (como han señalado algunos medios de comunicación occidentales), sino la debilidad política del movimiento revolucionario. Si sus dirigen-

tes fomentan las divisiones sectarias religiosas o étnicas o exigen la intervención del imperialismo, el gobierno de Al-Asad se fortalecerá.

Siria en el cruce de las potencias imperialistas

En Siria converge la revolución del mundo árabe con las crecientes fricciones interimperialistas que sacuden Oriente Próximo. Siria ha sido el principal aliado de Irán en Oriente Medio y también es un soporte fundamental de Hezbolá en Líbano. Por otro lado, a la burguesía sionista, que ha sufrido en su interior en verano movilizaciones de masas muy influenciadas por la revolución egipcia, no le importa que Siria se desangre en una guerra sectaria mientras sus fronteras se mantengan intactas. Israel ha utilizado tradicionalmente las acciones militares para desviar la atención de los problemas internos.

EEUU no tiene especial interés en intervenir directamente en Siria. De hecho Obama ya ha proclamado que, con el ascenso de China y la derrota de EEUU en Iraq y Afganistán el principal campo de actuación norteamericano tiene que ser el Pacífico. Si EEUU dirigió la invasión de Libia, fue más bien obligado por sus aliados franceses y británicos. Son estas dos potencias de segundo orden las que, en este contexto de crisis y contracción de los mercados, tratan con desesperación de aprovecharse de la “primavera árabe” para recuperar antiguas áreas de influencia.

En todo caso todos los escenarios están abiertos: el Pentágono es consciente de que una intervención de la OTAN en Siria podría terminar de reventar los equilibrios de poderes en Oriente Medio, pero también le preocupa que la influencia iraní siga extendiéndose por Iraq y Líbano. Por eso, por boca de sus aliados de Jordania, Arabia Saudí y Qatar se ha propuesto una intervención de fuerzas “árabes”. No deja de ser curioso que el rey de Arabia Saudí ahora califique de asesino a Al-Asad, cuando no tuvo ningún empacho en reprimir a sus propios súbditos o en enviar tropas al vecino Bahrein para aplastar el movimiento de masas que allí se había originado.

En todo caso, el gobierno de Al-Asad está muy debilitado y su situación económica es cada vez más angustiosa. Irán y Rusia están participando activamente en su sostén, vendiéndole armas y enviando asesores militares y de espionaje. El apoyo de Rusia a Siria no se debe tan solo a la tradicional alianza entre ambos países o al retroceso de la influencia rusa en el mundo, el miedo del Kremlin a que la revolución se extienda al Cáucaso o a la propia Rusia es un poderoso factor. No hace tanto tiempo de las movilizaciones en Irán contra el régimen de los ayatolás, y estos temen como al demonio que la revolución árabe se pueda extender a su país. Por eso no está descartado que pueda haber algún golpe de Estado en la cúpula

la —organizado con el concurso de Moscú y Teherán— para apartar a la familia Asad y comenzar a negociar con un sector de la oposición. Pero también podría darse un escenario de resistencia por parte del actual gobierno (a lo Gadafi) que pudiera desencadenar una guerra civil abierta donde las maniobras del imperialismo y el veneno sectario serían moneda de cambio.

Desde luego tampoco podemos descartar que, pese a la debilidad política de sus dirigentes, sean, finalmente, las propias masas las que terminen por derrocar a Al-Asad. En todo caso, cualquiera que sea la forma en que caiga, su defenestración es producto de las movilizaciones de masas. Pero no conviene perder de vista que incluso aunque Al-Asad caiga por la acción directa del pueblo sirio, eso no significa que la revolución esté a salvo: Como demuestran los casos de Túnez y Egipto, la burguesía y el imperialismo no dejarían de intrigar para frenar el avance de la revolución.

Por una política de independencia de clase

Como más arriba señalamos, muchos jóvenes y trabajadores sirios rechazan la intervención imperialista y están en contra de cualquier enfrentamiento sectario entre religiones o etnias. Precisamente por eso es necesaria una política de independencia de clase:

- Ninguna confianza con el imperialismo, ruptura con los elementos proimperialistas y reaccionarios. Rechazo absoluto de una intervención imperialista.
- No se puede confiar en los mandos corruptos del antiguo ejército. Trabajo organizado en la tropa del ejército para favorecer su organización, pierdan el miedo y se rebelen contra sus mandos.
- Para defenderse de la represión: Milicias Obreras, controladas por Comités de barrio y fábrica.
- Los miembros de estos Comités deben ser elegidos y revocados por la comunidad, coordinarán las movilizaciones y no pueden llegar a acuerdos a espaldas de la comunidad.
- Para unir a los trabajadores, campesinos y jóvenes de toda Siria, un programa que vincule la lucha por los derechos democráticos con las conquistas sociales:
- Reconocimiento de todos los derechos de asociación, reunión, expresión, libertad religiosa, etcétera. Derecho de autodeterminación para los kurdos.
- Ocupación, expropiación y control democrático de las empresas pertenecientes a la familia Asad y sus cómplices, así como de los bancos, las multinacionales y los terratenientes. Se pondrían a producir para satisfacer las necesidades sociales de los sirios.
- Por un Estado laico y democrático verdaderamente socialista, es decir, basado en comités y comunas democráticas y no en una dictadura burocrática.

Un programa de estas características disolvería la base de apoyo que aún conserva Al-Asad.

Sea cual sea el escenario que se dé en Siria, la revolución no está ni mucho menos sentenciada. Las masas no sólo tienen frente la máquina represiva del gobierno, también tienen que organizarse y enfrentarse a todos los que en nombre de la revolución pretenden secuestrarla. Está siendo un duro aprendizaje en todo el mundo árabe, pero es el precio a pagar por la inexistencia de organizaciones revolucionarias enraizadas en las masas. La revolución siria forma parte de un proceso mundial al que, lejos de mitigarse, no dejan de incorporarse nuevas zonas del planeta. Realmente estamos tan sólo en el inicio.

Nuevas medidas de austeridad del gobierno griego: los trabajadores responden con otra huelga general

María Castro

El 7 de febrero Grecia volvió a vivir una nueva huelga general, la participación fue masiva, según los sindicatos “un 80% de los trabajadores del sector privado y un 90% de los funcionarios han secundado la huelga” (*Público*, 7/2/12). El país quedó totalmente paralizado y miles de trabajadores participaron en las manifestaciones, a pesar de la lluvia torrencial. Las consignas más coreada era: “¡Que se vaya la troika!”, “¡La troika fuera de Grecia!” y “¡Abajo las medidas de miseria!”*.

La huelga se produce en medio de las conversaciones entre el primer ministro Lucas Papademos y los partidos que conforman el gobierno (Pasok, Nueva Democracia y el ultraderechista LAOS) para aprobar un nuevo plan de recortes, una imposición de los acreedores internacionales (UE, FMI y Banco Central Europeo) para que Grecia pueda acceder al segundo rescate, de 130.000 millones de euros. Si el rescate no llega el Estado griego entraría en bancarrota próximo 20 de marzo, ya que tiene que hacer frente a un pago de 14.500 millones de euros, con las repercusiones económicas y políticas que tendría para la UE. En el momento de escribir este artículo todavía no había acuerdo, pero se habla de recortar 1.100 millones de euros del sistema de salud, reducir un 20% el salario mínimo, eliminar las pagas extras en el sector privado y las vacaciones pagadas, y una nueva ronda de despidos en el sector público, 15.000 sólo este año; en total, desde el inicio de la crisis y hasta 2015, se prevé despedir a 150.000 funcionarios.

Peligro de explosión social

Aunque todos los partidos que participan en las negociaciones están de acuerdo en un nuevo paquete de recortes, las diferencias vie-



nen por el miedo a las repercusiones políticas y sociales que tendría un nuevo ataque. George Karatzaferis, líder de LAOS, fue bastante explícito ante las posibles consecuencias: “No voy a contribuir a una revolución que nos humillará y que incendiará Europa” (*www.egovmonitor.com*, 6/2/12); una semana antes ya había advertido del peligro de una “explosión social”.

Los planes de ajuste están teniendo unas consecuencias terribles para los trabajadores griegos y, sin duda, más ataques sólo servirán para incrementar la pobreza. Según los últimos datos publicados por el gobierno griego, tres millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza, un 27,7% de la población.

En abril está prevista la celebración de elecciones, aunque el 19 de febrero el gobierno debe confirmar oficialmente la fecha, algunos, como el ministro de economía, condiciona la celebración de elecciones a la lle-

gada del plan de rescate. Las encuestas pronostican una caída estrepitosa del PASOK, con una perspectiva de voto del 8%, convirtiéndose en el quinto partido, una debacle histórica. También señalan un aumento del voto a otras organizaciones de izquierda: el Partido Democrático de Izquierda, conseguiría el 18% de los votos, mientras que el Partido Comunista y Syriza conseguirían un 12% de los votos cada uno, casi 4 puntos más que en las últimas elecciones (*New York Times*, 6/2/12).

Nueva huelga general en Bélgica

Los trabajadores griegos han demostrado en la calle que no están dispuestos a aceptar más recortes. Lo mismo estamos viendo en otros países europeos, 2011 acabó con la mayor huelga del sector público británico en décadas, y huelgas generales en Portugal y Bélgica. Este nuevo año comienza con

una nueva huelga general en Bélgica. El 30 de enero, coincidiendo con la cumbre de la UE, por primera vez desde 1993, trabajadores del sector público y privado participaron conjuntamente en una huelga convocada por las tres principales federaciones sindicales. El motivo es el anuncio del gobierno de recortar 1.360 millones de euros, además de subidas de impuestos y ataques a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. El país quedó paralizado y la huelga fue seguida masivamente en la industria. Empresas como Audi, Volvo o Coca Cola quedaron paralizadas, lo mismo sucedió con el transporte, puertos o aeropuertos.

Las luchas han llegado también a Europa del Este, el 7 de febrero dimitió el gobierno rumano después de tres semanas de protestas masivas contra las medidas de austeridad. Las huelgas afectaron sobre todo al sector público, como en el caso de otros países europeos son los trabajadores más afectados por los recortes y los despidos. Sólo en 2009 el gobierno despidió a más de 12.000 trabajadores ferroviarios, todo para cumplir las exigencias del FMI a cambio de uno de sus préstamos.

La profundidad de las medidas de austeridad exigidas a la clase obrera en toda Europa es una advertencia de que la burguesía pretende cargar todo el peso de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Las últimas movilizaciones en Europa indican que los trabajadores europeos no están dispuestos a seguir haciendo sacrificios y que la perspectiva de “explosión social” no se limita sólo a Grecia, sino que es un fenómeno europeo.

* La “troika” hace referencia al trío de acreedores internacionales, Unión Europea, FMI y Banco Central Europeo

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

c) Se establece la disolución de las categorías profesionales en grupos profesionales y se impulsa la polivalencia funcional. La movilidad funcional podrá extralimitarse con acuerdo empresa-trabajador. Esto es, abrir la puerta al trabajador-orquesta que realice funciones de diferentes grupos profesionales para contratar menos personal.

d) La sustitución de parte de la estructura salarial fija, introduciendo el salario variable en función de los resultados de la empresa. Esto es, que el trabajador asuma los riesgos del negocio empresarial que en la práctica supone introducir la competencia entre trabajadores para conseguir un salario de subsistencia.

e) La parte del salario fijo sólo se incrementará un 0,5% en el año 2012 y un 0,6% en 2013. Asimismo, la revisión salarial por la desviación de la inflación, será la más conveniente para incrementar el salario lo menos posible. En este sentido, se introducen los criterios de que si los precios en España crecen más que la media de la UE, se aplicarán los de la UE y viceversa. Asimismo, se transmite a los salarios los riesgos derivados de una hipotética subida del precio del petróleo superior al 10%, descontando del IPC los combustibles y los carburantes. Medidas especialmente graves por el destrozo salarial que puede ocasionar a los trabajadores, sobre todo ante los riesgos de una subida descontrolada del petróleo por la crisis en Oriente Medio o una eventual salida del Estado español del euro (aunque improbable a corto plazo), con la corres-

Inminente reforma laboral: Horas decisivas para la clase trabajadora

Los dirigentes de CCOO y UGT firman con la CEOE un acuerdo lesivo para los intereses de los trabajadores

pondiente devaluación monetaria que haría que los salarios soportaran todo el peso de un shock de esas características por la dependencia energética que tiene el país.

f) Se aplica la contrarreforma laboral en las cláusulas de descuelgue salarial y de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Los firmantes se emplazan a dar vía libre al arbitraje para imponer el descuelgue del convenio en caso de desacuerdo entre las partes.

Como se puede comprobar, son medidas que van en la dirección de aumentar la tasa de ganancia empresarial, incrementando la explotación de la mano de obra y bajando salarios. Medidas que sólo se pueden traducir en más paro y más crisis, al deprimir la demanda por la reducción de salarios, a los que se une la brutal subida de impuestos a las rentas del trabajo reflejada en el IRPF por parte del gobierno del PP. Son medidas que van en la dirección contraria a la creación de empleo que dicen los firmantes. En realidad, ya en las empresas, el chantaje empresarial está provocando un incremento drástico de los ritmos de trabajo y del poder empresarial (mal llamada

flexibilidad interna), que se está manifestando en un aumento de la explotación de la mano de obra que lleva consigo algo elemental, producir más con menos, y eso sólo tiene la traducción de más paro.

El pacto antisocial abre las puertas a una reforma laboral dura e inminente

Si la intención de los dirigentes sindicales de UGT y CCOO era dar la razón a los empresarios y la derecha en todo, para frenar una reforma laboral dura, diciéndoles “no os preocupéis en legislar que ya lo hacemos nosotros”, han conseguido todo lo contrario. La firma del pacto antisocial ha abierto la puerta a una reforma laboral que puede lesionar derechos históricos de los trabajadores. Tan solo cinco días más tarde del pacto, el pasado 30 de enero, Mariano Rajoy lo dejaba claro en una no casual charla informal cuando dijo “la reforma laboral me va a costar una huelga”, en un mensaje claro a los sindicatos, dejaba entrever sus intenciones. En los siguientes días, numerosos medios económicos están avanzando la

reforma laboral que prepara el gobierno del PP, que no es otra que un salvaje abaratamiento del despido vía facilitar todavía más las causas del despido objetivo, por el que el empresario puede despedir de forma procedente por tan sólo una indemnización de 20 días por año trabajado, así como aplicar ya, directamente, la abolición para todos los nuevos trabajadores de la indemnización de 45 días por año trabajado.

Se acercan días decisivos para la clase obrera del Estado español, la derecha y el capital están preparando el gran saqueo, sumado a lo que los trabajadores ya venimos padeciendo en los últimos años. No es hora de pequeñas fricciones, ni de sectarismos, es hora de forjar una inquebrantable unidad de toda la clase obrera como un solo hombre y una sola mujer para hacer frente a un plan de ajuste salvaje e injusto. Hoy más que nunca, con más de cinco millones de parados, las palabras de Marx y Engels en *El Manifiesto Comunista*, “la burguesía no es capaz de dominar porque no es capaz de asegurar al esclavo la existencia ni siquiera dentro del marco de esclavitud”, vuelven con toda su vigencia.

Este artículo es un resumen, puedes leer el texto completo en www.elmilitante.net

Izquierda Unida (Extremadura) respalda los presupuestos antisociales del PP

Bárbara Areal

Las últimas elecciones autonómicas en Extremadura supusieron un enorme varapalo para el PSOE, que pagó duramente por su política de claudicación ante la gran banca y el capital perdiendo la mayoría en el parlamento regional. Un resultado que colocó al PP como la primera formación política y a los tres diputados obtenidos por IU ante importantes decisiones. Enfrentados a este escenario, los parlamentarios autonómicos de la coalición de izquierdas permitieron con su abstención la formación de un gobierno de derechas encabezado por José Antonio Monago, dando un paso decisivo al que han seguido otros. En una deriva nefasta de colaboración con el partido de la burguesía española, los dirigentes de IU en Extremadura llegaron en diciembre a un nuevo acuerdo con el PP para la aprobación de los presupuestos de 2012. En recompensa por todas estas muestras de apoyo, la derecha extremeña les ha premiado con el nombramiento de Ángel García Calle, candidato de IU por Badajoz, como director del Observatorio de Empleo de la Junta y con la entrada en el Consejo de Administración de la Radiotelevisión autonómica de Miguel Manzanera, coordinador del Área Programática de IU en la región.

Esta política impropia de personas que se dicen de izquierdas, y que incluso se presentan como “duros”, ha contado con la oposición de Cayo Lara, que ha recordado a estos dirigentes extremeños que la posición decidida por Izquierda Unida es la de no apoyar al PP “ni por activa ni por pasiva”. Por el contrario, su actitud comprensiva y de respaldo a la derecha también ha tenido algunos valedores significativos, entre otros, el de Julio Anguita, quien ha justificado este pacto con los enemigos declarados de la clase obrera con el argumento de que “sería un error exigirle a los compañeros de IU lo que el PSOE no ha exigido a los suyos cuando nos han arrebatado alcaldías para dárselas al PP”¹. Curioso método este, que propone que las traiciones de los dirigentes

Las consecuencias nefastas de colaborar con la derecha



del PSOE sean el punto de partida para la actuación de Izquierda Unida.

La colaboración de clases siempre ha sido el santo y seña de la socialdemocracia. Los ejemplos en la historia del movimiento obrero son muy abundantes, y trágicos por otra parte. En lo inmediato hemos visto al PSOE y el PP pactar una reforma constitucional para garantizar el pago de los intereses a la gran banca a costa del recorte salvaje de los gastos sociales; o a Patxi López gobernar en Euskadi con el apoyo del PP. Lamentablemente, esta política no es exclusiva de la dirección del PSOE. También en Euskadi, Ezker Batua gobernó anteriormente con el PNV, partido de la burguesía vasca; y en ayuntamientos de Andalucía, ahora y antes, IU llegó a pactos contra natura con la derecha.

Esta política de colaboración de clases es especialmente dolorosa para muchos militantes y votantes de IU, para muchos trabajadores que siguen siendo comunistas. ¿Cuándo los marxistas, los comunistas, hemos defendido o justificado apoyar a los

partidos políticos de la burguesía? ¿Desde cuando lavar la cara a estos reaccionarios, o respaldar en el parlamento sus leyes, tiene algo de revolucionario? Por mucho que los que defienden este tipo de alianzas interclassistas se esconden tras una fraseología izquierdista, que a veces incluso adornan con una retórica anticapitalista, la realidad se impone: no hacen más que avalar una posición reformista, típica de los socialdemócratas de derechas y de elementos pequeño burgueses al margen del movimiento real de la clase obrera y sus intereses.

Las consecuencias de abandonar una política de clase

¿Cuáles son los argumentos esgrimidos por los defensores de estos pactos con el PP? Pedro Escobar, diputado y coordinador regional de IU Extremadura, justificaba el apoyo a los presupuestos del PP afirmando que: “Los presupuestos suponen votar entre Guatemala y Guatepeor, pero tenemos que

tomar la mejor decisión para los extremeños”². Miguel Manzanera, a quien antes hacíamos referencia, remata la faena escribiendo en *Rebelión* que: “el PP aceptó las cláusulas que IU puso para gobernar, y ha hecho una política centrista y moderada, si la comparamos con lo que está sucediendo en otras autonomías”³.

Estos dirigentes, que supuestamente están a la izquierda del PSOE, consideran que su labor consiste en propagar la idea de que no hay más remedio que resignarse a elegir entre lo malo y lo peor. Respalando el presupuesto del PP, que supone un recorte de casi 20 millones de euros para la universidad pública, el despido de trabajadores de la administración autonómica y la venta de bienes públicos, estos diputados no hacen otra cosa que compartir, nos da igual en que proporción, la lógica de la austeridad defendida no sólo por la el anterior gobierno Zapatero, sino también por Rajoy, Merkel o Sarkozy. ¿Que diferencia hay entre Toxo y Mendez —secretarios generales de CCOO y UGT— cuando firman la congelación salarial con la CEOE, con el argumento de que son tiempos económicamente difíciles, y estos diputados que apoyan al partido de los patronos con el argumento de que hay que elegir entre “Guatemala y guatepeor”?

Nunca es correcto reivindicar la figura del *buen patrón*, pero en una región en la que el desempleo es del 24% y un 39,2% de los niños se encuentran en riesgo de pobreza relativa porque viven en hogares que tienen unos ingresos inferiores al 60% de la media estatal⁴, roza lo absurdo. Por tanto, a pesar de que Pedro Escobar hable de los intereses de los “extremeños”, así en general, en Extremadura también hay clases sociales con intereses antagónicos.

38º Congreso del PSOE

Hace falta un giro real a la izquierda

Pepe Martín

Portavoz en Málaga de Izquierda Socialista - PSOE

Los días 3, 4 y 5 de febrero se celebró en Sevilla el 38º Congreso del PSOE. Como nota característica podemos señalar que la necesidad de un profundo debate ideológico, sacar las conclusiones necesarias de la debacle electoral, analizar los errores cometidos y apostar por un giro real a la izquierda del partido, no sólo quedó en un segundo plano sino que ha brillado por su ausencia. Todo el foco se ha centrado en la elección de los 956 delegados asistentes entre los dos candidatos a la secretaría general del Partido. El momento más señalado de toda la agenda fue en el que por 487 votos contra 465 salía elegida la candidatura de Rubalcaba frente a la de Chacón.

La corriente Izquierda Socialista, representada en el Congreso escasamente por 15 delegados con voz pero sin voto, dejó en evidencia la necesidad de una profundización de la democracia interna que evite los filtros que distorsionan la representación de las bases. Encuestas recientes entre los afiliados y simpatizantes, señalan Iz-



quierda Socialista como la corriente más valorada y en alza en el PSOE, y esto es porque se siente la necesidad de un giro a la izquierda en la política del Partido.

Dos modelos semejantes

La necesidad de rectificación es evidente, pero la ausencia de debate no solo ha sido manifiesta en el Congreso. Las dificultades con la que se han encontrado los militan-

tes de base para participar en este proceso congresual han sido muy importantes (se han presentado más de 16.000 enmiendas, imposible de analizar con los mecanismos empleados y la falta de tiempo). Casi de forma precipitada por los plazos para comenzar la campaña electoral de Andalucía y de Asturias, el debate entre los miles de afiliados que componemos el PSOE ha sido prácticamente inexistente. La insuficiente democracia interna y una alta preci-

pitación que ha impedido un fiel reflejo del sentir de las bases. Desde Izquierda Socialista de Andalucía presentamos un documento programático como enmienda a la totalidad proponiendo un giro drástico a la izquierda. Las carencias de los mecanismos del debate impidieron que esta llegara a ser discutida en el Congreso, aunque un grupo de compañeros la distribuimos entre los delegados con muy buena aceptación por parte de un sector de ellos.

Al final, con todas estas limitaciones, a los afiliados no nos quedaba más remedio que asistir como meros espectadores y posicionarnos en el debate entre los dos candidatos oficiales de la dirección. Los dos defendían la misma ponencia marco, los dos el mismo programa y los dos planteaban una crítica demasiado superficial a la política aplicada por la dirección en los últimos años. Si bien es verdad que Rubalcaba estaba apoyado mayoritariamente por la socialdemocracia más conservadora, y los que defendían la candidatura de Chacón eran vistos como un sector que intentaba realizar algunos guiños a a la izquierda, en esencia sus discursos eran muy parecidos. Muchos compañeros, incluso de Izquierda Socialista, apoyaron a Carme Chacón por sus gestos y las declaraciones en su discurs-



Aún más pasmoso es el argumento del “centrismo popular extremeño”. ¿Alguien se puede creer que Monago y compañía discrepan con Rajoy en la necesidad de perseguir con saña cualquier iniciativa de la Memoria Histórica, homenajear al carnicero Fraga Iribarne, golpear la libertad de las mujeres con la contrarreforma de la ley del aborto, abaratar el despido, echar a la calle a decenas de miles de trabajadores del sector público y rematar la privatización de la sanidad y la educación pública?

En defensa de una política revolucionaria

Estos dirigentes, que también justifican su colaboración con el PP por las barrabasadas que el PSOE ha cometido en más de tres décadas al frente del gobierno extremeño, deberían escuchar la voz de la calle. Cuando cientos de miles de personas corean la consigna “lo llaman democracia y no le es” en las multitudinarias manifestaciones del 15-M, están poniendo el acento en el auténtico papel de las instituciones de la democracia burguesa. Si escucharan y fueran consecuentemente de izquierdas, entenderían que la corrupción y el arribismo que imperan en ayuntamientos y parlamentos sólo se puede combatir con una firme política de izquierdas que desenmascare a estos reac-

cionarios que no hacen otra cosa que golpear al pueblo y aplicar medidas en contra de la clase trabajadora.

A nuestro entender, estos compañeros deberían abandonar su autocomplaciente papel de hábiles negociadores capaces de convertir a un tigre al vegetarianismo, y asumir que vivimos en una sociedad dividida en clases con intereses irreconciliables, y en un contexto de brutal crisis económica en el que la burguesía intenta aplastar a la clase obrera. Entonces, firmemente apoyados en un programa anticapitalista y clasista, utilizarían la tribuna para denunciar al PP y sus políticas procapitalistas, y no las respaldarían vergonzosamente. Denunciarían a todo aquel que argumente que no hay dinero para gastos sociales enumerando los beneficios empresariales, el dinero público regalado a la banca y a las grandes fortunas extremeñas. Explicarían que no es dentro sino fuera de los parlamentos, a través de la organización y la lucha donde la clase obrera y la juventud conquistan sus derechos, y defenderían una IU revolucionaria, ajena al trapicheo de los cargos y prebendas institucionales.

1. Agencia EFE, 21/6/2011.
2. Europa Press, 17/01/2012.
3. Las dimisiones en la Presidencia de Izquierda Unida de Extremadura, 30/11/2011.
4. Datos del estudio Infancia en España 2010-11, publicado por Unicef.

so a favor de “abrir puertas y ventanas para que entre el aire fresco” y profundizar estatutariamente los derechos de los militantes para reforzar la democracia interna. Sin embargo, desde la Corriente Izquierda Socialista no apoyamos a ninguno de los candidatos: la necesidad de un giro a la izquierda real no estaba representada en Carme Chacón. Su autocritica, positiva desde luego, no era suficiente.

Hay que romper con la dictadura de los bancos y el gran capital

El resultado final del Congreso ha significado un reforzamiento del aparato en torno a Rubalcaba, que no ha dudado en designar una Comisión Ejecutiva de la que ha marginado a los partidarios de Chacón. Esto puede tener consecuencias de cara a profundizar en la división interna del aparato, pero en cualquier caso se necesitarán presiones de otro tipo, derivadas directamente de la lucha de clases, para que se desarrolle un ala de izquierdas con fuerza y que adopte una política consecuente. Como explicamos en nuestra enmienda a la totalidad del informe general, es necesario un giro real a la izquierda, rompiendo con la política de apoyo a la banca y de socorro al sistema capitalista, planteando que sí existe otra alternativa al capitalismo desde la izquierda. Una alternativa que pasa por la lucha y la defensa de medidas claramente socialistas, entre ellas la negativa rotunda a aceptar ningún recorte en el gasto social y la nacionalización de la ban-

ca y el sector financiero bajo control democrático de los trabajadores y sus organizaciones. Para hacer frente a la embestida de la derecha, este giro se debe concretar en la unidad de acción con el conjunto de las organizaciones sindicales y de izquierda para impulsar un plan de movilizaciones sostenida en el tiempo, comenzando por la convocatoria de una huelga general.

Si la nueva dirección continua con la misma estrategia y táctica de los últimos años, si no se desmarca claramente de las políticas antisociales como las que viene aplicando el PP, que están representando un deterioro enorme de las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora, no recuperaremos la confianza de los millones de trabajadores que en las últimas elecciones nos dieron la espalda. Consideramos que el Partido todavía mantiene cerca de siete millones de votantes y simpatizantes, pese a haber perdido más de cuatro millones de electores, y es necesario contar con ellos. Pero lograrlo y atraer a ese sector desencantado y frustrado con la política gubernamental del partido, exige defender una salida favorable a los intereses de los trabajadores, que ofrezca *Respuestas desde la Izquierda** a la recesión tan brutal a la que nos ha llevado la crisis estructural del sistema capitalista.

* Si quieres recibir el documento presentado por Izquierda Socialista de Andalucía en el 38º Congreso, solicítalo escribiendo a ls-psoe.malaga@terra.es, indicando como asunto “Revista”.



Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla)

Presupuestos sin recortes y manteniendo el gasto público

Santiago Jiménez
Alcalde de Villaverde del Río por IU

En el mes de febrero se presentará el presupuesto del Ayuntamiento de Villaverde. Frente a la política generalizada de ajustes y recortes, de despidos, de bajas salariales y ataques a los trabajadores, nosotros reivindicamos en la práctica, recogiendo en el documento presupuestario, todos los derechos sociales y laborales de los trabajadores municipales, el rescate de los servicios privatizados, como la limpieza de los colegios y sobre todo el servicio de la ley de dependencia, con más de cuarenta trabajadoras que pasarán a tener contratos públicos, así como el mantenimiento de los servicios y programas sociales, culturales, deportivos, etc., que el Ayuntamiento venía prestando.

Ayuntamientos endeudados

La situación de la mayoría de los Ayuntamientos es crónica. La deuda es asfixiante y no hay recursos para afrontar los pagos más urgentes, incluido las nóminas. Este estado de cosas se está agravando por momentos porque las entidades locales son las receptoras de la inmensa bolsa de marginación y necesidad que está creando la crisis económica, mientras el resto de administraciones reducen la financiación y las ayudas a los ayuntamientos. En estos aspectos, Villaverde del Río no es diferente a otros municipios. La deuda que el gobierno de IU ha encontrado al acceder a la alcaldía ronda los cinco millones de euros, en facturas, obligaciones y operaciones con los bancos, es decir, debemos una cantidad similar a la de nuestro propio presupuesto corriente de un año. Sin embargo, esta losa no ha sido la nota decisiva a la hora de planificar la política económica y social de gobierno municipal. Por el contrario, el capítulo primero de personal recoge íntegramente los derechos recogidos en el convenio del Ayuntamiento, las previsiones de gasto salarial de toda la plantilla, sin prescindir de ningún trabajador y especialmente destacaremos el esfuerzo económico para garantizar programas de ayudas a las familias más necesitadas, para discapacitados, infancia, las subvenciones a las asociaciones culturales, deportivas, educativas, etc., o para la formación y el empleo como la puesta en marcha en este año de un Taller de Empleo con un presupuesto de 219.235 euros.

Que paguen los que más tienen

Prácticamente no ha habido subida de impuestos para el conjunto de la población. Incluso se ha bajado un impuesto tan jugoso para los ayuntamientos como las licencias de obras, que se han reducido a la mitad o a una tercera parte para los jóve-

nes y trabajadores que reforman o se construyen su propia vivienda. ¿Entonces, cómo se ha conseguido cuadrar el presupuesto? Un elemento importante ha sido seguir nuestra máxima de que pague más el que más tiene. De tal manera, hemos creado una tasa exclusiva para las entidades bancarias por el servicio de cajeros automáticos en la calle, hemos forzado a la petrolera CEPSA el abono de 44.000 euros por varios conceptos que tenía convenidos con el Ayuntamiento de Villaverde pero que no pagaba desde 1987 y, sobre todo, hemos exigido a las promotoras y constructoras que cumplan con sus compromisos y obligaciones. Así, a la empresa Guadasol se le han requerido tasas e impuestos municipales por valor de más de 800.000 euros. Una cantidad astronómica producto de la promoción de un bloque de 58 pisos, que continúan en estructura, que ha sido un auténtico fracaso en materia de vivienda y que, por supuesto, el anterior equipo de gobierno de la coalición PP-PSOE se negaba a pasarles al cobro. Nosotros reflejamos esta misma cantidad en el capítulo de inversiones precisamente como parte de los fondos necesarios para acabar los pisos bajo la iniciativa municipal, contratando a los trabajadores y trabajadoras desempleadas de la localidad y una vez terminadas, adjudicarlas en asamblea a los demandantes de vivienda a precios de costo. Bancos, inmobiliarias y multinacionales (CEPSA), he aquí los principales causantes de la crisis y los que deberían de pagarla. Si el gobierno de Zapatero, en lugar de cargar el peso de la crisis sobre las rentas del trabajo, hubiera tenido la misma política que el gobierno obrero de Villaverde habría podido enfrentarse al déficit, la deuda y el consiguiente chantaje de los mercados, ¡y otro gallo le hubiera cantado en las elecciones!

Levantar la bandera de la defensa de los derechos sociales y laborales

Hoy más que nunca se necesitan gobiernos que defiendan en los hechos el gasto social, los programas de atención a los más débiles y los derechos laborales y salariales de los trabajadores. La ofensiva de las políticas del Partido Popular, de los bancos y las instituciones capitalistas que exigen el recorte de la inversión y del gasto público para contener el déficit, que dan por sentado que estas medidas son las únicas posibles para salir de la crisis, han de ser contestadas por la izquierda con una política alternativa y con hechos demostrables. En Villaverde podemos encontrar un ejemplo. Nuestro presupuesto es un arma en defensa de los intereses de las clases populares y contra el discurso engañoso del capital de austeridad a costa de los trabajadores.

La trama de los bebés robados ¡Justicia y reparación a las víctimas!

Pilar Ramírez López de Abetxuko

Hace ya un año que estalló el escándalo con los primeros testimonios de personas que sospechaban haber sido robadas al nacer. Inmediatamente se denunciaron más de 1.400 casos y hubo una demanda colectiva, por primera vez, pidiendo la apertura de una investigación sobre la suerte de 261 recién nacidos, pero apenas se abrieron investigaciones. Las denuncias cobraron interés al comprobar, tras las primeras exhumaciones, que algunas de estas tumbas estaban vacías o los féretros no tenían evidencias de haber alojado ningún rastro biológico. Organizados a través de internet, las tres asociaciones que se han formado aunaron esfuerzos para denunciar públicamente este hecho y así presentaron 89.666 firmas a la Fiscalía General del Estado pidiendo que cese de archivar las denuncias y se reabran los casos cerrados.

Los vínculos de la Iglesia Católica con el franquismo

Como ocurría durante la dictadura en Argentina, el franquismo quitaba los niños a las presas políticas del bando republicano como un método más de represión y después eran fusiladas. En virtud de un decreto de 1940, en el Estado Español se podía quitar la custodia a las familias si consideraban que la “educación moral” de los niños estaba amenazada. De esa forma se los entregaban a organizaciones católicas o los daban ilegalmente en adopción. Se decía a las madres que sus hijos habían muerto en el parto y los niños eran vendidos a familias que no podían tener hijos, las cuales, a menudo falsificaban las identidades de los bebés para que figurasen como hijos biológicos en el libro de familia de los nuevos padres.



En la posguerra, estas tramas de tráfico de bebés tuvieron cobertura legal y el amparo del psiquiatra de cabecera del franquismo, el comandante Antonio Vallejo-Nájera, que inspirado en la política de los nazis, predicaba la segregación y selección de los niños desde su nacimiento. “La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia, podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible” (*La locura en la guerra. Psicopatología de la guerra española*, 1936).

El régimen franquista incluso puso en marcha una prisión para Madres Lactantes en donde sólo se les permitía estar en contacto con sus bebés una hora al día. La colaboración y la implicación de la Iglesia Católica y sus instituciones religiosas, Casas de Auxilio Social y Hospicios, jugaron un

papel determinante en toda esta trama. Muchas embarazadas eran llevadas a las instituciones religiosas hasta que culminaba el embarazo y después debían entregar el hijo. Así, mujeres adeptas al régimen y con dinero, monjas y curas intercambiaban información con las familias adoptivas.

Al término del franquismo en 1975, los responsables de algunas clínicas continuaron con esta práctica lucrativa. Médicos como José Antonio Usandizaga, muy próximo al Opus Dei y militante activo contra el aborto, ejercieron en el Hospital de Basurto, en Bilbao, donde también se ha denunciado una trama de adopciones ilegales y después lo hizo como jefe de obstetricia y ginecología del Hospital La Paz de Madrid, o Ignacio Villa Elizaga, también cercano al Opus, trabajó en la maternidad de O'Donnell y en la actualidad es profesor de la Universidad de Navarra, o Eduardo Vela de la Clínica San Ramón, de Madrid, donde se entregó a

cientos de bebés que reclaman ahora sus historiales, y un sinnúmero de monjas, enfermeras, abogados que habían tejido una red que seguía demandando bebés.

En otros casos mujeres solteras que habían quedado embarazadas, captadas a veces a través del Teléfono de la Esperanza, y obligadas por la presión de una sociedad dominada por el nacional-catolicismo y en no pocos casos amenazadas y engañadas, cedían a sus hijos en adopción. En otros eran esposas de clase obrera y familias humildes a las que después de haber atendido el parto, se les retiraba el bebé y se les decía que había muerto o que tenía graves malformaciones, de tal forma que no era necesario que pasasen por el “doloroso trauma” de verlos. Muchas de estas mujeres temerosas de contrariar a los “batas blancas”, que eran “dioses” en aquella época o a las monjas se resignaban de tal suerte. Otras que aún insistían en verlos eran engañadas enseñándoles ropas o incluso bebés que estaban congelados.

La Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) estima que hasta un total de 300.000 recién nacidos podrían haber sido robados durante la dictadura y hasta finales de los ochenta.

Un aparato estatal heredado del franquismo

Tras la larga noche del franquismo, los líderes reformistas de la izquierda, tanto del PSOE como del PCE, en lugar de exigir y forzar una depuración del aparato estatal y esclarecer todos los crímenes del franquismo, en la mal llamada transición, se comprometieron con una vergonzosa ley de punto y final que nunca fue aprobada en el Parlamento, y de esta manera los crímenes de la dictadura quedaron impunes. Por otro

Juicio a Garzón o la podredumbre de un aparato estatal heredado de la dictadura franquista

Víctor Taibo y Miguel Ángel del Barrio

Las últimas semanas en relación al enjuiciamiento del juez Garzón ha vuelto a poner de manifiesto una realidad que se quiere mantener oculta: sectores del aparato del Estado, y concretamente la judicatura en sus más altas instancias, siguen bajo el control de elementos reaccionarios y fascistas que defienden al franquismo.

Cuando Garzón decidió declararse competente en el caso de la localización y exhumación de una parte de los aproximadamente 150.000 asesinados en la represión que siguió al levantamiento fascista de 1936, se desató una ofensiva política y judicial tremenda desde la derecha para impedir que el caso se desarrollase.

Ha llegado a tal punto la implicación del aparato judicial, que el propio juez de instrucción del caso, Luciano Varela, ayudó a dichas organizaciones, dándoles una segunda oportunidad para corregir sus escritos de calificación, algo completamente irregular y que hubiera supuesto el fin del procedimiento, pero que para la Sala de lo Penal que juzga a Garzón son “excesos” insuficientes para anular el procedimiento.

Se ha hablado mucho de la “venganza contra un juez” y la actuación de la “derecha judicial” que busca tapar las vergüenzas del PP como la trama Gürtel. No hay duda de que existe un punto importante de verdad en estas valoraciones; pero estas no explican, ni mucho menos, la cuestión de fondo, es decir, por qué en el Estado español, después de 32 años de “libertades democráticas”, siguen sin poder investigarse los crímenes del franquismo; siguen existiendo decenas de miles de víctimas, no sólo enterradas en fosas comunes (de las que ya hay localizadas oficialmente 1.793), sino consideradas delincuentes a ojos de esa ley que se niega a investigar sus asesinatos; y por qué los nombres de los fascistas que practicaron esa política de exterminio siguen adornando calles, plazas, iglesias y monumentos.

La justicia en cualquier Estado capitalista es una justicia de clase. En el caso concreto del Estado español, además, se da la circunstancia de que el aparato judicial también es un auténtico coto franquista, que se mantuvo intacto después de la caída de la dictadura por los pactos de la “transición”.

Por este mismo motivo es necesario diferenciar entre lo que este caso ha revelado, y la idea de presentar a Garzón con-

mo el gran campeón de las libertades democráticas. En este punto, dejando claro que estamos absolutamente en contra de este juicio, hay que ser rigurosos y honestos. Garzón tiene una aureola de luchar por la justicia universal y algunos medios de comunicación le han otorgado muchos elogios como un juez progresista. Pero también hay otra cara, un lado profundamente negativo, como sus actuaciones judiciales respaldando una ley completamente antidemocrática como es la Ley de Partidos que, con la excusa de luchar contra ETA, recorta libertades políticas y será utilizada contra el movimiento obrero si pone en cuestión el capitalismo. Como es público y notorio, el juez Garzón también ha sido uno de los principales valedores de la teoría de que en Euskal Herria, todo lo que huele a euskera, independentismo, etc., “es ETA”. En base a esta se han llevado a cabo muchas encarcelaciones fraudulentas e incluso cierres de periódicos; acciones que suponen una grave vulneración de las libertades democráticas, tal como quedo demostrado con la sentencia sobre el caso Egunkaria. Luchar contra los franquistas, contra la reacción, por la depuración de estos elementos del aparato del Estado no nos obliga a encumbrar a un juez que también ha contribuido, en dife-

rentes ocasiones, a limitar los derechos democráticos.

La transición y la Ley de la Memoria Histórica, dos oportunidades perdidas

En octubre de 1977 se aprobó la Ley de Amnistía por la cual, a cambio de “perdonar” a los encarcelados, torturados y perseguidos por luchar contra la dictadura, dejaba absolutamente impunes 40 años de represión franquista. Nunca jamás hubo en la historia reciente una ley de punto final semejante. En esa época los dirigentes reformistas de la izquierda en lugar de apoyarse en la enorme fortaleza del movimiento obrero y juvenil, auténtico protagonista de la lucha contra la dictadura, para haber llevado adelante la transformación socialista de la sociedad, en aras del consenso y de la política “realista” de lo posible, del “no provocar a la reacción” —argumentos que hoy vuelven a poner sobre la mesa—, aceptaron la lógica del capitalismo, la monarquía, la bandera, y su consecuencia obvia: que hoy en día las altas instancias de la judicatura estén plagada de los mismos jueces que ya ejercían en el franquismo.

Tras la victoria electoral de Zapatero en 2004 parecía que por fin la reivindicación

lado, se está poniendo todo tipo de trabas a la investigación y tergiversación de estos crímenes, presentando los casos que se dieron tras el franquismo como asunto privado de tráfico de niños y no como “memoria histórica” y por tanto sin la obligación del Estado para restituir el daño causado por la dictadura.

Precisamente, la empresa privada que ha recogido el ADN de familias afectadas por los robos de bebés es Genómica, que tiene como directora general a Rosario de Cospedal García, hermana de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. La empresa ha salido a la luz porque equivocó el resultado de las pruebas genéticas de una madre y una hija de Valencia y León, de 60 y 30 años. El laboratorio les había comunicado ya en dos ocasiones, la primera vez el pasado 6 de julio, que las supuestas madre e hija no tenían relación sanguínea. El 26 de agosto, Genómica, ante la insistencia de las afectadas, que tenían un gran parecido físico y documentos que ponían de manifiesto su posible relación, envió una carta con un tercer resultado en el que se anunciaba a estas mujeres que su ADN coincide. La empresa Genómica forma parte del grupo Zeltia, integrado por varias filiales del sector químico-farmacéutico. La mayor parte de los responsables de las empresas que integran el grupo farmacéutico Zeltia, del que forma parte el laboratorio de pruebas de ADN Genómica, han sido formados por el Opus Dei. También este grupo empresarial cuenta con otros socios como Ana de Palacio, ex ministra del Partido Popular y conocida por su militancia en esa organización fundada en Navarra. Además, el grupo farmacéutico lleva a cabo proyectos de investigación con la Clínica Universidad de Navarra, privada, y también dependiente del Opus. Es un escándalo que el Ministerio de Justicia no haya hecho ya un Banco de ADN, para evitar que empresas privadas se lucren y guarden esa información en un banco privado. Sin embargo, ha sido precisamente Dolores de Cospedal, presidenta de Cas-

tilla - La Mancha, quien ha nombrado recientemente a Ignacio Villa —director de la *Cope* e hijo del médico supuestamente implicado en el robo de bebés, Ignacio Villa Elizaga— director de la radiotelevisión castellanomanchega. Según Soriano, representante de Plataforma de Afectados, “es bastante peligroso que personas relacionadas o cercanas a médicos implicados en el robo de bebés tengan acceso a nuestros datos”, en referencia a las relaciones de Genómica con el entorno del Opus Dei.

Un listado de médicos relacionados con el PP

Lo mismo sucede con el doctor, ya fallecido, José Botella Llusía, tío de la mujer de José María Aznar, Ana Botella, y que es acusado por las asociaciones de niños robados de estar implicado en el tráfico de bebés. También el padre de Jaime Mayor Oreja, José María Mayor Lizarbe, ha sido incluido en un listado de médicos que supuestamente participaron en el robo de bebés durante el franquismo junto a 35 médicos más en quince hospitales, según ha denunciado la plataforma de afectados por el robo de bebés del País Vasco.

Toda esta red creada durante el franquismo se convirtió en una máquina de hacer dinero y continuó con cobertura al más alto nivel. Esta operación tan masiva no hubiese podido continuar de no ser por la bendición de una Iglesia Católica que gestionaba la mayoría de los servicios sociales, incluyendo hospitales, escuelas y orfanatos. Hasta 1987 no hubo ninguna ley en el Estado Español sobre adopciones, y aún se habla de estas prácticas hasta fechas tan recientes como 1993.

Los otros “desaparecidos” de Franco no están en fosas comunes ni en cunetas pero durante años han vivido con una identidad que no es la suya. Algunos de ellos son ancianos, otros no tanto, pero tienen derecho a saber quiénes son, genética, biológica y psicológicamente y a acabar con esta impunidad.



Muere Fraga sin pagar sus crímenes

Miguel Mitxitorena

El 16 de enero nos despertábamos con la noticia de la muerte de Manuel Fraga, fundador del PP, ministro franquista, enemigo jurado del movimiento obrero, la libertad y los derechos democráticos. Si la dictadura franquista fue un régimen genocida, Fraga fue uno de sus más conspicuos representantes. Franco le fue ascendiendo hasta que, cuando ya empezaban a ser más claro el descontento de amplios sectores de la población, le nombra en 1962 ministro de Información (anteriormente Ministerio de Agitación y Propaganda). Durante su mandato como alto jerifalte de la dictadura aprobó la represiva Ley de Prensa e Imprenta, ordenó la voladura del diario Madrid, aumentó la censura política, y llevó a cabo otras hazañas al “servicio del Estado”, entre las que destacan su implicación directa en los asesinatos del dirigente comunista Julián Grimau y de los anarquistas Delgado y Granados.

Asesino de trabajadores

Su ideología fascista le llevó a mostrar su odio a la clase trabajadora en numerosas ocasiones. Tras la muerte del dictador, en noviembre de 1975, sus compinches franquistas le negaron el cargo de presidente del nuevo gobierno pero Fraga asumió la cartera del Ministerio de la Gobernación (el de Interior ahora) desde donde controló un aparato represivo que emplearía a fondo en los meses siguientes.

A principios de diciembre de 1975, 25.000 obreros metalúrgicos de Madrid se habían declarado en huelga y las minas asturianas estaban paralizadas. A comienzos de enero del año siguiente estalla la huelga en el Metro de Madrid. Le siguen las huelgas en Correos y Telefónica. Después Renfe, taxis y cientos de empresas del cinturón industrial de Madrid se ponen en lucha, y el Gobierno, en un acto de desesperación para frenar el auge del movimiento, militariza el Metro y Correos. Durante las huelgas del mes de enero en todo el Estado se perdieron 21 millones de horas de trabajo. La lucha llegó a su punto más intenso en Vitoria, a comienzos del mes de marzo. Para el día 3 de marzo, después de 54 días ininterrumpidos de huelga, es convocada una nueva huelga general en toda Vitoria. La ciudad queda paralizada y más de 5.000 personas asisten a la asamblea general convocada en la Iglesia de San Francisco. La policía carga contra la multitud disparando balas de plomo. Mueren tres obreros y más de cien son heridos. Dos obreros fallecen más tarde en el hospital a causa de las heridas provocadas por la brutal acción policial.

Los sucesos de Vitoria tienen un efecto eléctrico sobre la conciencia de centenares de miles de trabajadores de todo el Estado. Estallan huelgas y manifestaciones espontáneas, pero los dirigentes de CCOO llaman a la calma y no convocan nada. El día 8 de marzo se convoca la huelga general sólo en el País Vasco y 500.000 trabajadores responden como un

solo hombre en solidaridad con los obreros de Vitoria. En Basauri (Vizcaya), un joven obrero de 18 años muere de un balazo en la cabeza a manos de la policía.

La represión policial organizada por ese “luchador de la libertad”, como quieren ahora presentar a Manuel Fraga, es auxiliada en muchas ocasiones por las bandas fascistas que cuentan con el apoyo y la impunidad del aparato del Estado. El 9 de mayo, los carlistas de Carlos Hugo (escisión de carácter izquierdista de los antiguos requetés fascistas) organizaban su concentración anual en Montejurra (Navarra), a la que también acudían diversos grupos de izquierda. Ese día, bandas fascistas disuelven la concentración de 3.000 personas a tiro limpio, matando a dos de ellas, una de las cuales era un obrero de Estella. Los asesinatos nunca fueron juzgados y después se supo que fueron financiados por miembros del propio Gobierno. También Fraga era, en esos momentos, el ministro de Gobernación. La indignación por estos hechos en todo el Estado fue enorme y, a pesar de que la historia oficial intenta borrar el rastro de su actuación, han pasado a la posteridad muchas de sus expresiones: “la calle es mía”, “si quieren poner la ikurriña tendrán que pasar por encima de mi cadáver”, etc., que demuestran la ideología fascista de este “servidor público”.

¿Un demócrata?

Cuando el régimen franquista atraviesa una agonía terminal enfrentado a un movimiento de protesta que se extiende por toda la geografía del Estado, Fraga, junto con otros antiguos exponentes de la dictadura, se meten de lleno en una operación “reformista” para lograr que los crímenes de la dictadura no sean juzgados, sus políticos continúen con sus carreras sin sobresalto, y el país siga bajo el control firme de una clase capitalista que apoyó sin ambigüedad a la dictadura. Con el beneplácito de las direcciones de los partidos obreros, se organizan elecciones a una asamblea constituyente en 1977, pero Fraga tiene mucho que objetar a los derechos democráticos, que aunque limitados, se han arrancado a través de la sangre de la clase obrera y la juventud. Desgajado del núcleo que conforma UCD, Fraga se alinea con los sectores más ultramontanos del franquismo y crea Alianza Popular, que más tarde se refundaría como Partido Popular.

Ahora que ha muerto sin ser juzgado, una mayoría de los políticos honran a Fraga como un “gran demócrata” y subrayan su papel como “padre” de la Constitución. El proceso de la “Transición” siempre se ha presentado por parte de la burguesía, y sus agentes en el movimiento obrero, como un pacto de caballeros entre los sectores moderados del viejo régimen, entre los que estaba Fraga, y los líderes obreros “responsables” que, bajo los auspicios del moderno rey Juan Carlos, permitió superar sin traumas la dictadura.



de “verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo” se iba a abordar. Pero las esperanzas fueron de nuevo frustradas. Ningún punto fundamental de las reivindicaciones de las víctimas ha sido satisfecho en la ley que se aprobó en 2007. De hecho, queda explícitamente restringida la participación de los poderes públicos en el proceso de exhumación de cadáveres, algo básico si se quiere realmente investigar los crímenes, y que han tenido que costear las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica. Ahora con la llegada al Gobierno del PP, en cuyas filas participan los herederos directos e incluso aún responsables directos de la represión franquista, el futuro de dicha exhumaciones

peligra con la más que probable derogación de la Ley de la Memoria Histórica y de las limitadas ayudas que conllevaba.

En los últimos años hubiera sido posible impulsar, desde el PSOE, IU, CCOO y UGT, un fuerte movimiento a favor de una ley justa, tal como reclamaban a las asociaciones en defensa de la memoria histórica. Existía un sentir mayoritario entre la población contra la derecha, el mayor desde la transición. Pero en lugar de eso los dirigentes de la izquierda volvieron a caer en el viejo error de “no provocar a la reacción”. Por este camino está descartado investigar ningún crimen del franquismo ni depurar la justicia de elementos fascistas.

'El Capital' de Marx

por Federico Engels

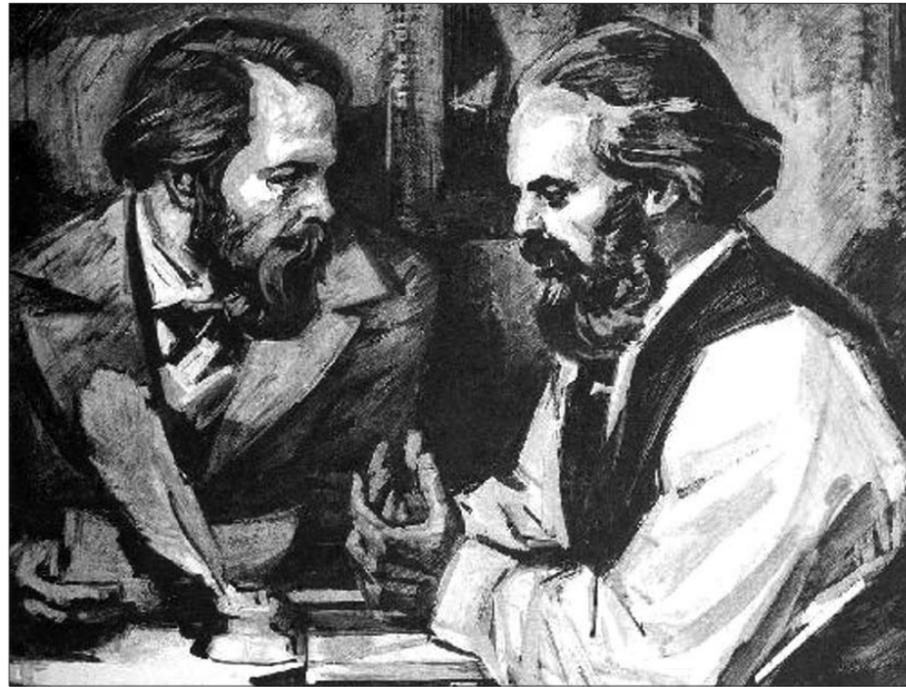
El texto de Engels que reproducimos a continuación es una reseña escrita en 1867 al primer tomo de *El Capital* de Marx y publicada en *Demokratisches Wochenblatt*, un periódico obrero alemán que jugó un importante papel en la formación del Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania. De forma muy didáctica, y a la vez profunda y rigurosa, Engels esboza los fundamentos teóricos de la explotación capitalista. Consideramos muy oportuna su lec-

tura, dada la profunda crisis en la que está inmerso el capitalismo y la brutal ofensiva que la burguesía está lanzando contra la clase obrera. Además, este material es un incentivo para que todos los trabajadores y jóvenes más concientes y comprometidos con la lucha por transformar la sociedad profundicen en la teoría marxista y, en particular, se animen a abordar esta obra maestra del pensamiento humano que es *El Capital*.

Desde que hay en el mundo capitalistas y obreros, no se ha publicado un solo libro que tenga para los obreros la importancia de éste. En él se estudia científicamente, por vez primera, la relación entre el capital y el trabajo, eje en torno del cual gira todo el sistema de la moderna sociedad, y se hace con una profundidad y un rigor sólo posibles en un alemán. Por más valiosas que son y serán siempre las obras de un Owen, de un Saint-Simon, de un Fourier, tenía que ser un alemán quien escalase la cumbre desde la que se domina, claro y nítido —como se domina desde la cima de las montañas el paisaje de las colinas situadas más abajo—, todo el campo de las modernas relaciones sociales.

La contradicción que la teoría económica burguesa no resolvió

La economía política al uso nos enseña que el trabajo es la fuente de toda la riqueza y la medida de todos los valores, de tal modo, que dos objetos cuya producción haya costado el mismo tiempo de trabajo encierran idéntico valor; y como, por término medio, sólo pueden cambiarse entre sí valores iguales, esos objetos deben poder ser cambiados el uno por el otro. Pero, al mismo tiempo, nos enseña que existe una especie de trabajo acumulado, al que esa Economía da el nombre de capital, y que este capital, gracias a los recursos auxiliares que encierra, eleva cien y mil veces la capacidad productiva del trabajo vivo, en gracia a lo cual exige una cierta remuneración, que se conoce con el nombre de beneficio o ganancia. Todos sabemos que lo que sucede en realidad es que, mientras las ganancias del trabajo muerto, acumulado, crecen en proporciones cada vez más asombrosas y los capitales de los capitalistas se hacen cada día más gigantescos, el salario del trabajo vivo se reduce cada vez más, y la masa de los obreros, que viven exclusivamente de un salario, se hace cada vez más numerosa y más pobre. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? ¿Cómo es posible que el capitalista obtenga una ganancia, si al obrero se le



retribuye el valor íntegro del trabajo que incorpora a su producto? Como el cambio supone siempre valores iguales, parece que tiene necesariamente que suceder así. Más, por otra parte, ¿cómo pueden cambiarse valores iguales, y cómo puede retribuírse al obrero el valor íntegro de su producto, si, como muchos economistas reconocen, este producto se distribuye entre él y el capitalista? Ante esta contradicción, la Economía al uso se queda perpleja y no sabe más que escribir o balbucir unas cuantas frases confusas, que no dicen nada. Tampoco los críticos socialistas de la Economía política, anteriores a nuestra época, pasaron de poner de manifiesto la contradicción; ninguno logró resolverla, hasta que Marx, por fin, analizó el proceso de formación de la ganancia, remontándose a su verdadera fuente y poniendo en claro, con ello, todo el problema.

¿De dónde nace la plusvalía?

En su investigación del capital, Marx parte del hecho sencillo y notorio de que los capitalistas valorizan su capital por medio del

cambio, comprando mercancías con su dinero para venderlas después por más de lo que les han costado. Por ejemplo, un capitalista compra algodón por valor de 1.000 táleros y lo revende por 1.100, "ganando" por tanto 100 táleros. Este superávit de 100 táleros, que viene a incrementar el capital primitivo, es lo que Marx llama plusvalía. ¿De dónde nace esta plusvalía? Los economistas parten del supuesto de que sólo se cambian valores iguales, y esto, en el campo de la teoría abstracta, es exacto. Por tanto, la operación consistente en comprar algodón y en volverlo a vender, no puede engendrar una plusvalía, como no puede engendrarla el hecho de cambiar un tálero por treinta silbergroschen o el de volver a cambiar las monedas fraccionarias por el tálero de plata. Después de realizar esta operación, el poseedor del tálero no es más rico ni más pobre que antes. Mas la plusvalía no puede brotar tampoco del hecho de que los vendedores coloquen sus mercancías por más de lo que valen o de que los compradores las obtengan por debajo de su valor, porque los que ahora son compradores son luego vendedores, y, por tanto, lo que ganan en un caso lo pierden en el otro. Ni puede provenir tampoco de que los compradores y vendedores se engañen los unos a los otros, pues eso no crearía ningún valor nuevo o plusvalía, sino que haría cambiar únicamente la distribución del capital existente entre los capitalistas. Y no obstante, a pesar de comprar y vender las mercancías por lo que valen, el capitalista saca de ellas más valor del que ha invertido. ¿Cómo se explica esto?

Bajo el régimen social vigente, el capitalista encuentra en el mercado una mercancía que posee la peregrina cualidad de que, al consumirse, engendra nuevo valor, crea un nuevo valor: esta mercancía es la fuerza de trabajo.

La fuerza del trabajo

¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? El valor de toda mercancía se mide por el trabajo necesario para producirla. La fuerza de trabajo existe bajo la forma del obrero vivo, quien para vivir y mantener además a su fa-

Das Kapital.

Kritik der politischen Oekonomie.

Von

Karl Marx.

Erster Band.

Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals.

Das Recht der Uebersetzung wird vorbehalten.

Hamburg

Verlag von Otto Meissner.

1867.

New-York: L. W. Schmidt, 24 Barclay-Street.

Primera edición del Tomo 1 de *El Capital*, 1867

milia que garantice la persistencia de la fuerza de trabajo aun después de su muerte, necesita una determinada cantidad de medios de vida. El tiempo de trabajo necesario para producir estos medios de vida representa, por tanto, el valor de la fuerza de trabajo. El capitalista se lo paga semanalmente al obrero y le compra con ello el uso de su trabajo durante una semana. Hasta aquí, esperamos que los señores economistas estarán, sobre poco más o menos, de acuerdo con nosotros, en lo que al valor de la fuerza de trabajo se refiere.

El capitalista pone a su obrero a trabajar. El obrero le suministra al cabo de determinado tiempo la cantidad de trabajo representada por su salario semanal. Supongamos que el salario semanal de un obrero equivale a tres días de trabajo; si el obrero comienza a trabajar el lunes, el miércoles por la noche habrá reintegrado al capitalista el valor íntegro de su salario. Pero, ¿es que deja de trabajar una vez conseguido esto? Nada de eso. El capitalista le ha comprado el trabajo de una semana; por tanto, el obrero tiene que seguir trabajando los tres días que faltan para ésta. Este plustrabajo del obrero, después de cubrir el tiempo necesario para reembolsar al patrono su salario, es la fuente de la plusvalía, de la ganancia, del incremento progresivo del capital.

Y no se diga que eso de que el obrero rescata en tres días, trabajando, el salario que percibe, y que durante los tres días restantes trabaja para el capitalista, es una suposición arbitraria. Por el momento, nos tiene absolutamente sin cuidado, y es cosa que depende de las circunstancias, el que para reponer el salario necesite realmente tres días, o dos, o cuatro; lo importante es que, además del trabajo pagado, el capitalista le saca al obrero trabajo que no le retribuye. Y esto no es ninguna suposición arbitraria, ya que el día en que el capitalista, a la larga, sólo sacase del obrero el trabajo que le remunera mediante el salario, cerraría la fábrica, pues toda su ganancia se iría a pique.

He aquí la solución de todas aquellas contradicciones. El nacimiento de la plusvalía (de la que una parte importante constituye la ganancia del capitalista) es, ahora, completamente claro y natural. Al obrero se le paga, ciertamente, el valor de la fuerza de trabajo. Lo que ocurre es que este valor es bastante inferior al que el capitalista logra sacar de ella, y la diferencia, o sea el trabajo no retribuido, es lo que constituye precisamente la parte del capitalista, o mejor dicho, de la clase capitalista. Pues, hasta la ganancia que en nuestro ejemplo de más arriba obtenía el comerciante algodoner al vender el algodón, tiene que provenir necesariamente, si la mercancía no sube de precio, del trabajo no retribuido. El comerciante tiene que vender su mercancía a un fabricante de tejidos de algodón, quien puede sacar del artículo que fabrica, además de



aquellos 100 táleros, un beneficio para sí, compartiendo, por tanto, con el comerciante el trabajo no retribuido que se embolsa. De este trabajo no retribuido viven en general todos los miembros ociosos de la sociedad. De él salen los impuestos que cobran el Estado y el municipio, en la parte que grava a la clase capitalista, la renta del suelo abonada a los terratenientes, etc. Sobre él descansa todo el orden social existente.

Sería necio, sin embargo, creer que el trabajo no retribuido solo ha surgido bajo las condiciones actuales, en que la producción corre a cargo de capitalistas de una parte y de obreros asalariados de otra parte. Nada más lejos de la verdad. La clase oprimida se ha visto forzada a rendir trabajo no retribuido en todas las épocas de la historia. Durante los largos siglos en que la esclavitud era la forma dominante de organización del trabajo, los esclavos se veían obligados a trabajar mucho más de lo que se les pagaba en forma de medios de vida. Bajo la dominación de la servidumbre de la gleba y hasta la abolición de la prestación personal campesina, ocurría lo mismo; aquí, incluso adquiría forma tangible la diferencia entre el tiempo durante el cual el campesino trabajaba para su propio sustento y el plus trabajo que rendía para el señor feudal, precisamente porque éste lo ejecutaba en otro sitio que aquel. Hoy, la forma ha cambiado, pero el fondo sigue siendo el mismo, y mientras “una parte de la sociedad posea el monopolio de los medios de producción, el obrero, sea libre o no libre, no tendrá más remedio que añadir al tiempo durante el cual trabaja para su propio sustento un tiempo de trabajo adicional para producir los medios de vida destinados a los poseedores de los instrumentos de producción”.

II

Veamos en nuestro artículo anterior que todo obrero enrolado por el capitalista ejecuta un doble trabajo: durante una parte del tiempo que trabaja, repone el salario que el capitalista le adelanta, y esta parte del trabajo es lo que Marx llama trabajo necesario. Pero luego, tiene que seguir trabajando y producir la plusvalía para el capitalista, una parte importante de la cual representa la ganancia. Esta parte de trabajo recibe el nombre de plus trabajo.

Supongamos que el obrero trabaja durante tres días de la semana para reponer su salario y tres días para crearle plusvalía al capitalista. Expresado en otros términos, esto vale tanto como decir que, si la jornada es de doce horas, trabaja seis horas por su salario y otras seis para la producción de plusvalía. De una semana sólo pueden sacarse seis días o siete, a lo sumo, incluyendo el domingo; en cambio, a cada día se le pueden arrancar seis, ocho, diez, doce, quince horas de trabajo, y aún más. El obrero vende al capitalista, por el jornal, una jornada de trabajo. Pero ¿qué es una jornada de trabajo? ¿Ocho horas, o dieciocho?

La jornada de trabajo

Al capitalista le interesa que la jornada de trabajo sea lo más larga posible. Cuanto más larga sea, mayor plusvalía rendirá. Al obrero le dice su certero instinto que cada hora más que trabaja, después de reponer el salario, es una hora que se le sustrae ilegítimamente, y sufre en su propia pelleja las consecuencias del exceso de trabajo. El capitalista lucha por su ganancia, el obrero por su salud, por un par de horas de descanso al día, para poder hacer algo más que trabajar, comer y dormir, para poder actuar también en otros aspectos como hombre. Diremos de pasada que no depende de la buena voluntad de cada capitalista en particular luchar o no por sus intereses, pues la competencia obliga hasta a los más filantrópicos a seguir las huellas de los demás, haciendo a sus obreros trabajar el mismo tiempo que trabajan los otros.



La lucha por conseguir que se fije la jornada de trabajo dura desde que aparecen en la escena de la historia los obreros libres hasta nuestros días. En distintas industrias rigen distintas jornadas tradicionales de trabajo, pero, en la práctica, son muy contados los casos en que se respeta la tradición. Sólo puede decirse que existe verdadera jornada normal de trabajo allí donde la ley fija esta jornada y se encarga de velar por su aplicación. Hasta hoy, puede afirmarse que esto sólo acontece en los distritos fabriles de Inglaterra. En las fábricas inglesas rige la jornada de diez horas (o sea, diez horas y media durante cinco días y siete horas y media los sábados) para todas las mujeres y los chicos de trece a dieciocho años; y como los hombres no pueden trabajar sin la cooperación de aquellos elementos, de hecho también ellos disfrutan la jornada de diez horas. Los obreros fabriles de Inglaterra arrancaron esta ley a fuerza de años y años de perseverancia en la más tenaz y obstinada lucha contra los fabricantes, mediante la libertad de prensa y el derecho de reunión y asociación y explotando también hábilmente las disensiones en el seno de la propia clase gobernante. Esta ley se ha convertido en el paladín de los obreros ingleses, ha ido aplicándose poco a poco a todas las grandes ramas industriales, y el año pasado se hizo extensiva a casi todas las industrias, por lo menos a todas aquellas en que trabajan mujeres y niños. Acerca de la historia de esta reglamentación legal de la jornada de trabajo en Inglaterra, se contienen datos

abundantísimos en la obra que estamos comentando. En el próximo Reichstag del Norte de Alemania se deliberará también acerca de una ordenanza industrial, y, por tanto, se pondrá a debate la reglamentación del trabajo fabril. Esperamos que ninguno de los diputados elegidos por los obreros alemanes intervendrá en la discusión de esta ley sin antes familiarizarse bien con el libro de Marx. Aquí se podrá lograr mucho. Las disensiones que existen en el seno de las clases dominantes son más propicias para los obreros que lo han sido nunca en Inglaterra, porque el sufragio universal obliga a las clases dominantes a captarse las simpatías de los obreros. En estas condiciones, cuatro o cinco representantes del proletariado, si saben aprovecharse de su situación, y sobre todo si saben de qué se trata, cosa que no saben los burgueses, pueden constituir una fuerza. El libro de Marx pone en sus manos, perfectamente dispuestos, todos los datos necesarios.

La acumulación de capital

Pasaremos por alto una serie de excelentes investigaciones, de carácter más bien teórico, y nos detendremos tan sólo en el capítulo final de la obra, que trata de la acumulación del capital. En este capítulo se pone primero de manifiesto que el método capitalista de producción, es decir, el método de producción que presupone la existencia de capitalistas, por una parte, y de obreros asalariados, por otra, no sólo le reproduce al

capitalista constantemente su capital, sino que reproduce, incesantemente, la pobreza del obrero, velando, por tanto, por que existan siempre, de un lado, capitalistas que concentran en sus manos la propiedad de todos los medios de vida, materias primas e instrumentos de producción, y, de otro lado, la gran masa de obreros obligados a vender a estos capitalistas su fuerza de trabajo por una cantidad de medios de vida que, en el mejor de los casos, sólo alcanza para sostenerlos en condiciones de trabajar y de criar una nueva generación de proletarios aptos para el trabajo. Pero el capital no se limita a reproducirse, sino que aumenta y crece incesantemente, con lo cual aumenta y crece también su poder sobre la clase de los obreros desposeídos de toda propiedad. Y, del mismo modo que el capital se reproduce a sí mismo en proporciones cada vez mayores, el moderno modo capitalista de producción reproduce igualmente, en proporciones que van siempre en aumento, en número creciente sin cesar la clase de los obreros desposeídos. “La acumulación del capital reproduce la relación del capital en una escala mayor: a más capitalistas o a mayores capitalistas en un polo, en el otro polo más obreros asalariados... La acumulación del capital significa, por tanto, el crecimiento del proletariado”. Pero, como los progresos de la maquinaria, el cultivo perfeccionado de la tierra, etc., hacen que cada vez se necesiten menos obreros para producir la misma cantidad de artículos, y como este perfeccionamiento, es decir, esta creación de obreros sobrantes, aumenta con mayor rapidez que el propio capital creciente, ¿qué se hace de este número, cada vez mayor, de obreros superfluos? Forman un ejército industrial de reserva, al que en las épocas malas o medianas se le paga menos de lo que vale su trabajo, que trabaja sólo de vez en cuando o se queda a merced de la beneficencia pública, pero que es indispensable para la clase capitalista en las épocas de gran actividad, como ocurre actualmente, a todas luces, en Inglaterra, y que en todo caso sirve para vencer la resistencia de los obreros ocupados normalmente y para mantener bajos sus salarios. “Cuanto mayor es la riqueza social... tanto mayor es la superpoblación relativa, es decir, el ejército industrial de reserva. Y cuanto mayor es este ejército de reserva, en relación con el ejército obrero activo (o sea, con los obreros ocupados normalmente), tanto mayor es la masa de superpoblación consolidada (permanente), es decir, las capas obreras cuya miseria está en razón inversa a sus tormentos de trabajo. Finalmente, cuanto más extenso es en la clase obrera el sector de la pobreza y el ejército industrial de reserva, tanto mayor es también el pauperismo oficial. Tal es la ley absoluta, general, de la acumulación capitalista”.

He ahí, puestas de manifiesto con todo rigor científico —los economistas oficiales se guardan mucho de intentar siquiera refutarlas— algunas de las leyes fundamentales del moderno sistema social capitalista. Pero, ¿queda dicho todo, con esto? No, ni mucho menos. Con la misma nitidez con que destaca los lados negativos de la producción capitalista, Marx pone de relieve que esta forma social era necesaria para desarrollar las fuerzas productivas sociales hasta un nivel que haga posible un desarrollo igual y digno del ser humano para todos los miembros de la sociedad. Todas las formas sociales anteriores eran demasiado pobres para esto. Sólo la producción capitalista crea las riquezas y las fuerzas productivas necesarias para ello, pero crea también, al mismo tiempo, con las masas de obreros oprimidos, una clase social obligada más y más a tomar en sus manos estas riquezas y fuerzas productivas, para conseguir que sean aprovechadas en beneficio de toda la sociedad y no, como hoy, en el de una clase monopolista.

Nota de la Redacción: los epígrafes no están en el texto original.

Sergio García

Crisis política y elecciones anticipadas en Asturias

El pasado 30 de enero Francisco Álvarez-Cascos, presidente del Principado de Asturias, anunciaba la disolución del gobierno de la Junta General y la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 25 de marzo. Han bastado siete meses de gobierno en minoría de Foro Asturias (FAC) para llegar a este extremo. La gota que colmó el vaso fue el rechazo mayoritario (por parte de los grupos políticos del PP y PSOE en el parlamento) de los Presupuestos Generales para 2012 que presentó el actual gobierno a finales de enero. Es la primera vez que se produce un adelanto electoral en Asturias, comunidad que afrontará un horizonte político de gran incertidumbre en los próximos meses en un contexto de crisis económica y social sin precedentes.

El triunfo de FAC en las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2010 supuso un auténtico terremoto político en una región con una tradición de izquierdas muy arraigada. El desplome electoral del PSOE (perdiendo unos 79.000 votos) demostró la incapacidad de las políticas socialdemócratas para resolver los problemas fundamentales de la región como son el paro, el desmantelamiento industrial, la vivienda, etc. y allanó el camino para que la derecha llegara al gobierno.

El surgimiento de FAC

FAC surgió a partir de la crisis interna del PP asturiano por la discusión en torno a quiénes debían ocupar los principales puestos en las listas electorales autonómicas y se creó alrededor de la figura de Álvarez-Cascos, enfrentado al sector que representa a nivel estatal Mariano Rajoy. Las luchas internas por cuotas de poder y el caciquismo han sido una constante dentro de la derecha en estos años.

Cascos utilizó su pasado de “hombre fuerte” para ganar una base de apoyo dentro del PP y arrastrar a un sector del partido. Echó mano de un discurso demagógico y populista donde aparecía enfrentado a las “castas políticas del PP y PSOE” llamando a los asturianos a “rebelarse” con su voto. Conquistó a los votantes tradicionales de la dere-



cha y arrastró a sectores de las capas medias, pequeños comerciantes, profesionales y algunos sectores políticamente atrasados de la clase obrera desilusionados con las políticas de los gobiernos de coalición PSOE-IU y azotados por la crisis económica.

A pesar del triunfo, FAC sólo consiguió 16 escaños en el parlamento (frente a 15 del PSOE, 10 del PP y 4 de IU) de un total de 45 escaños. Comenzaron las negociaciones que se prolongaron durante casi dos meses para formar nuevo gobierno. Todo parecía indicar un acercamiento entre las dos fuerzas políticas de la derecha, al fin y al cabo FAC y PP defienden el mismo programa de recortes, privatizaciones y ataques al movimiento obrero y la juventud: son la misma derecha de toda la vida. En Gijón y Oviedo consiguieron llegar a acuerdos para gobernar las respectivas alcaldías. Pero las diferencias y los enfrentamientos hicieron imposible un acuerdo regional, quedándose Cascos en minoría.

FAC propone llevar a cabo un programa de contrarreformas salvaje: recortes en el gasto social, reducción del sector público (cierres y venta de empresas públicas como la constructora Sedes, la Radio y Televisión Pública, RTPA), desmantelamiento de la sa-

lud pública, privatización de la educación pública, rebajar los impuestos a los empresarios y las grandes fortunas, fomentar la precariedad laboral (el llamado “salario joven”), recortes a los proyectos culturales (como el Centro Niemeyer y el Festival de Cine de Gijón), etc.

Cascos guardó en el cajón parte de estos planes debido a la proximidad de las elecciones generales en las que presentó candidatura. Finalmente consiguió la mitad de los votos que en las autonómicas demostrando las limitaciones de su proyecto político. El enfrentamiento con el PP volvió a manifestarse con el anuncio de Plan de Ajuste del gobierno central a finales del año pasado. Cascos criticó los recortes y dijo que eran “inasumibles para Asturias”.

Con el rechazo de los presupuestos regionales se prorrogaron los del año anterior, que ya presentaban recortes en el gasto social. Mientras tanto, Cascos quiere utilizar la crisis política para afianzar su posición en Asturias echando las culpas sobre la “pinza PP-PSOE”. Seguramente con el anuncio esperaba pillar al resto de partidos con el paso cambiado y sin tiempo para reaccionar: el PSOE en medio de un proceso de discusión interna, el PP sin un candidato

claro. Cascos intenta presentarse como “yo o la vuelta al pasado”. Sin embargo la apuesta es arriesgada y puede costarle votos. En todo caso el escenario que se abre es de incertidumbre y habrá que ver cómo se desarrolla esta crisis política y qué gobierno puede resultar de ella.

Situación social alarmante

La situación social en Asturias es alarmante. El desempleo alcanzó la cifra histórica de 90.537 parados a principios de este año. Se calcula que al menos 32.000 parados no cobran ningún tipo de prestación y hay más 27.000 hogares con todos sus miembros en paro. Desde el verano de 2008 se han destruido más de 42.000 puestos de trabajo y el desempleo entre los jóvenes supera el 50%. Por otra parte el poco empleo generado es precario y temporal (de los 18.644 contratos firmados en noviembre, sólo el 5,75% son indefinidos).

Lamentablemente los dirigentes sindicales de CCOO y UGT han optado por la senda del consenso con los empresarios y la derecha de FAC. Con esta política del “mal menor” se está frenando la posibilidad de dar una respuesta unificada y contundente por parte de los trabajadores a los ajustes, favoreciendo que la derecha pueda seguir manteniéndose en el gobierno a pesar de estar dividida y enfrentada.

Los dirigentes de la izquierda tienen una gran oportunidad para recuperar el terreno perdido. Pero no será buscando alianzas con el PP como han hecho los dirigentes del PSOE en la Junta General. Tampoco en los llamamientos vacíos de los dirigentes de IU a formar un gobierno “fuerte”. Se trata de oponerse a la política de ajuste y ataques a los trabajadores y la juventud con la movilización en la calle, rompiendo la política de pacto social de los dirigentes sindicales, recuperando un programa auténtico de izquierdas y defendiendo una alternativa a la crisis del capitalismo.

Miguel Varela
Lugo

El BNG no corrige el rumbo

Los días 28 y 29 de enero se celebró en Santiago de Compostela, la XIII Asamblea Nacional del Bloque Nacionalista Galego. El sector que hasta ahora ostentaba la dirección de la organización ha vuelto a salir vencedor, con 2.338 votos de afiliados, a pesar del avance de la corriente más a la derecha, que logra 2.043 votos.

La asamblea se realizaba en un momento de importantes tensiones dentro de la organización, que volvieron a evidenciarse tras los resultados de la últimas elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. En estas elecciones el descalabro del PSOE no pudo ser aprovechado por el BNG. En Galicia el PSOE perdió 292.859 votos, y el BNG 28.506 votos. Es decir, que pese a que un gran número de votantes de PSOE decidió no votar a su partido habitual, no consideraron al BNG como una alternativa. Mientras que el BNG retrocedía, IU, que no tenía posibilidad de alcanzar representación parlamentaria aumentaba en 42.398 votos.

Una década de retrocesos

El BNG ha sido la organización que la mayoría de los trabajadores y jóvenes gallegos consideraban más a la izquierda del orbe político gallego. Esta reputación se la

ganó en diferentes luchas en la calle en defensa de la lengua gallega, de los servicios públicos y diferentes luchas obreras. Pero tras años de éxitos electorales, ha registrado una tendencia a la baja en el número de votos constante durante los últimos diez años, tanto en las elecciones autonómicas, estatales como municipales. Esto ha sido así producto del progresivo abandono de la política combativa y su discurso de izquierda, por lo que muchos de sus votantes lo han acabado viendo como un partido institucional más.

A la asamblea presentaban candidatura las siguientes organizaciones: Unión do Povo Galego (UPG), que se declara nacionalista y comunista y que ostenta la actual dirección, Encontro Irmandiño que está abanderado por el dirigente histórico Xose Manuel Beiras, Mais Galiza, la corriente más a la derecha y una fuerza minoritaria llamada Movemento Galego ao Socialismo, que correctamente afirma que el retroceso del Bloque se debe a su giro a la derecha y exige un giro a la izquierda. Sin embargo, esta corriente no plantea la necesidad de expropiar a los capitalistas y luchar por el socialismo, sino que se limita a afirmar la necesidad de un modelo económico a favor de la mayoría, y “una sociedad más justa” en abstracto.

Continuismo

La corriente que volvió a resultar vencedora, la UPG, presentó una tesis poco crítica con el pasado. Las propuestas fundamentales se basaron en la reiteración de los mismos postulados que venían defendiendo hasta ahora: reforma del modelo autonómico para conseguir una mayor soberanía nacional, más autogobierno, blindaje competencial, un nuevo modelo territorial, y una defensa muy escueta y superficial de mayor gasto social para la defensa de los servicios públicos gallegos.

Encontro Irmandiño y Mais Galiza decidieron pocos días antes de la asamblea presentar una candidatura conjunta. En la práctica, pretenden una ruptura con el pasado de la organización con un giro a la derecha y un enfoque hacia una no definida “mayoría social”; una ampliación de su base electoral sin importar si esta viene por la izquierda o la derecha. En sus tesis podemos leer que el BNG “debe acompañar mejor el discurso y la acción política” ya que existe “una frustración por parte de la militancia de que nuestras proclamas eran irrealizables”, es decir, que es necesaria una ruptura con las ideas socialistas que el BNG tiene desde sus orígenes. Continuaban afirmando que “no se puede dejar la definición de su política”, “en manos de organi-

zaciones sectoriales...” en una clara referencia sin nombrarla, a la CIG, el sindicato gallego muy vinculado al BNG y a sus bases.

¿Y ahora?

Años de abandono de una política combativa en la calle y su sustitución por la política estrictamente institucional y reformista, ha desmoralizado al sector más combativo y militante del Bloque y fortalecido a la derecha de la organización. La posibilidad de una escisión sigue presente. Si bien la derecha no ha logrado hacerse con la máxima dirección del BNG, la línea política del Bloque va a continuar la misma senda que provocó el divorcio con sus bases. Si no hay un cambio de rumbo, el desapego de la clase trabajadora con el Bloque va a continuar.

La crisis económica ha afectado seriamente a la clase obrera gallega y muchos jóvenes y trabajadores se están cuestionando el sistema capitalista. Si el BNG se dotase de un programa claramente socialista, que defendiese la expropiación de los capitalistas, empezando por todas aquellas empresas que se declaran en quiebra —astilleros de Vigo, para empezar— y organizase la resistencia a todos los planes de recorte de la Xunta y el Gobierno central, volvería a entusiasmar a las decenas de miles que se han visto desilusionados en los últimos años. Las condiciones objetivas para que ese programa conectase con la juventud y la clase obrera son las mejores en décadas.

Ulises Benito

Impagos, recortes y lucha en el País Valenciano

Unas enormes manifestaciones han recorrido las calles valencianas en la tercera semana de enero. El 21, 160.000 profesores, padres y estudiantes (en Valencia y Alicante) exigían una educación pública de calidad. El 26, unos 200.000 manifestantes (en las tres capitales) expresábamos un rechazo diáfano a los salvajes ataques a los servicios públicos, y a los trabajadores del sector público, que la Generalitat de Alberto Fabra está llevando a cabo.

El País Valenciano se acerca, según todos los indicios, a un estado de convulsión social. Existen suficientes elementos que demuestran la enorme rabia, la indignación ya no contenida, las ganas de lucha, de sectores muy amplios de la población. En primera línea, los trabajadores del sector público, que están protagonizando concentraciones, ocupaciones de despacho, cortes de tráfico, etc. Hay que destacar el grado de organización y combatividad de los trabajadores sanitarios y, muy especialmente, de los docentes.

La aprobación de un decreto-ley a principios de enero cogió por sorpresa a gran parte de la población. Éstas son algunas de las medidas del decreto-ley, y de decisiones posteriores, con respecto a los servicios públicos y sus trabajadores:

- Una reducción de 271 millones en la masa salarial. Para ello reducen la jornada laboral (y consecuentemente los salarios) de los interinos y temporales. Esto implica una reducción de cientos de euros (hasta 800) al mes. Los interinos (y otros colectivos docentes) serán despedidos a final de curso, para así no pagar sus vacaciones. Además, se prevén despidos y se eliminan ayudas sociales. Estos despidos y reducción de jornada implica, evidentemente, más trabajo para menos manos, es decir, una brutal saturación en los servicios públicos.

- Un recorte generalizado en la prestación de servicios. Prácticamente todos los conceptos y todos los servicios públicos lo sufren. En la sanidad implica el cierre de centros de salud teóricamente obsoletos y de puntos de atención continuada (*las urgencias de Primaria*), el retraso de la apertura de Urgencias de las 15 a las 21 horas, la paralización de la desviación a clínicas privadas (lo que, según CCOO, aumentará las listas de espera en 40.000 pacientes), el cierre de los consultorios los sábados, etc. Se hará un control sobre los pacientes que superen los nueve días de ingreso hospitalario. Por último, la Generalitat del PP ha anunciado la posibilidad del *copago* sanitario.

- El cierre de empresas públicas y el avance en la privatización. Así, en Ràdio Televisió Valenciana se prevé un ERE de mil trabajadores (el 60% de la plantilla), mientras abren al negocio privado futuros canales temáticos de Canal Nou codificados. Mientras, en sanidad, se generalizará la introducción de la empresa privada.

- El aumento de impuestos, que afecta principalmente a la clase obrera y capas medias. Se concreta en: aumento del tramo autonómico del IRPF, subida del 100% del mal llamado céntimo sanitario (se cobrarán casi 5 céntimos por litro de gasolina), tijejetazo en las deducciones fiscales, que afectarán a



278.000 familias, y eliminación de beneficios para jubilados y jóvenes en el metro de la capital (de competencia autonómica).

Impagos de la Generalitat

Esta situación tan dramática, que deja en los huesos conquistas vitales del pasado, se ve amplificada por la supuesta falta de liquidez de la Generalitat. El caos financiero se apodera de ella, provocando un pertinaz impago a los centros públicos de todo tipo, a los proveedores y a las numerosas empresas que trafican con los servicios sociales, repercutiendo éstas las consecuencias en sus trabajadores y usuarios. Uno de los casos más graves es la enseñanza pública. Los colegios e institutos subsisten día a día sin fondos suficientes para los gastos corrientes. Las sustituciones fueron interrumpidas durante mes y medio, ahora se han reanudado de forma parcial. La falta de espacio es endémica (se dan clases en despachos, pasillos, baños).

La Universidad también ha dado varias veces la señal de alarma, amenazando con su cierre si no se libra al menos parte de la deuda que tiene la Generalitat con ella (900 millones). Por otro lado, responsables de áreas de salud han avisado al *conseller* de Sanitat que si los retrasos en los pagos se mantienen, podrían dejar de entregar las nóminas a los trabajadores. Los centros de empleo de discapacitados exigirán 27 millones por vía judicial, mientras prevén despedir a 200 trabajadores y el cierre de trece de ellos antes de abril; la mayoría de la plantilla no cobra desde hace meses. A todo esto se junta la brutal situación de la economía valenciana; en estos momentos hay 641.000 parados en el territorio, y 100.000 familias sin ingresos. Y la Federación Valenciana de Municipios calcula en 80 los ayuntamientos que se verán abocados a la bancarrota este año.

Los 'grandes eventos'

Los impagos y recortes son la fatal consecuencia, no sólo de la crisis económica, sino de la política del PP. Toda la estrategia en la que se ha basado para mantener el control durante lustros del País Valenciano

hace aguas. Desde la llegada del Partido Popular al Palau de Manises (sede de la Generalitat), en 1995, ha saqueado los recursos públicos en beneficio de la clase dominante (y de ellos y sus familiares y amigos, como una camarilla dentro de esa clase). Mientras privatizaban la sanidad y educación (deteriorando la pública mientras multiplicaban conciertos con la privada), e infiltraban los servicios públicos de empresas privadas, convirtiendo aquéllos en nutrientes de éstas (en sanidad, en Canal 9, en la atención a la tercera edad, al menor, al discapacitado...), convertían la política de *grandes eventos* en una gran oportunidad de negocio. El caso de la F-1 es especialmente escandaloso: la Generalitat ha tenido que *nacionalizar* (comprar por un euro) Valmor Sports, que era la intermediaria que pagaba al decrepito parásito Bernie Ecclestone, dueño de la Fórmula 1; con esta acción se ha hecho deudor de 94 millones por las tres ediciones que faltan. Fabra está valorando rescindir el contrato, pero si no logra negociar con Ecclestone tendrá que pagar en cualquier caso esa cantidad. Pero lo más grave es que justo antes de dimitir Camps firmó un contrato que obliga a la Generalitat a pagar 24 millones anuales ¡hasta 2020! por la continuidad de la carrera en Valencia hasta entonces, siempre y cuando Cataluña renunciara a organizarla (renuncia que ya ha anunciado la Generalitat catalana).

Lerma, acusado de derrochador por el PP, dejó una deuda de 2.500 millones. En julio, cuando dimitió Camps, la deuda era de 20.500, o sea, un 600% más. El País Valenciano está en lo más alto: es la comunidad con la deuda mayor en función del PIB (un 20%, frente al 6% que había dejado Lerma).

El Gobierno ha tenido que echar un capote a la Generalitat tres veces desde diciembre, adelantándole sus envíos (la primera, para desembolsar a los tenedores de *bonos patrióticos*; la segunda, para pagar un crédito vencido una semana antes del Deutsche Bank). Este año tienen que afrontar vencimientos por valor de 4.000 millones, 1.500 de ellos en mayo. La única forma de hacerlo, según el *conseller* Vela, es creando *hispanobonos*, es decir, bonos respaldados por el Estado central. La posibilidad (blandida por el ministro de Economía, Luis de Guindos) de la intervención en las comunidades autónomas, es muy real, al menos en el caso valenciano.

El caldo de la corrupción

La estrategia pasada del PP fue el caldo de cultivo ideal para generalizar a niveles insospechados la corrupción. Los continuos casos que van apareciendo, y que sólo es la punta del iceberg, demuestran una actitud de autocomplacencia y prepotencia amasada en años de impunidad absoluta. El *caso Gürtel*, la trama de Emarsa, el fraude en

Aguas de Calpe, las ramificaciones valencianas de los negocios de Urdangarin, los diferentes *casos Fabra* (Carlos), el cacique de Castellón... muestran cómo la corrupción ha infiltrado hasta la médula la institución autonómica. Las declaraciones de Rita Barberá, alcaldesa valenciana ("un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente normal") reflejan bien la sicología de la clase dominante. La absolución de Camps era un hecho bastante probable, desde el momento en que, en una maniobra judicial, se limitó su acusación al delito de cohecho pasivo (recibir regalos en función de su cargo), sin valorar las investigaciones sobre las contrapartidas que esos regalos tuvieron, y la extrema conexión entre las empresas de la trama, el PP y la Generalitat. Por cierto, esta absolución, y la dificultad para esconder estas corruptelas, son un incentivo mayor de la movilización popular.

El movimiento en la calle y la rémora de los dirigentes de izquierda

Para valorar todo el potencial del movimiento que se está levantando hay que entender que es el fruto maduro de una acumulación de frustraciones y descontento larvados durante años, y que de forma episódica se expresaba en la calle, para retirarse de ella ante la dejación de las direcciones sindicales y políticas que dejaban huérfano el movimiento, negándose a extenderlo y unificarlo, a elevar el nivel de conciencia y a politizar; a veces, incluso, negándose a participar en la propia lucha.

Hemos tenido manifestaciones masivas, y todo indica que las seguiremos teniendo (el sábado 25 hay convocadas otras del sector público). El 13 de enero, 15.000 trabajadores sanitarios participaron en concentraciones a las puertas de sus centros. Trescientos galenos reunidos en la asamblea del Colegio Oficial de Médicos de Valencia votan una resolución pidiendo a los sindicatos que convoquen una huelga indefinida hasta parar los recortes; "si hace falta dinero que los políticos se rebajen el sueldo", dicen). En la educación decenas de institutos están en lucha permanente, haciendo encierros los martes por la noche, cortando calles y carreteras, etc.; en Gandia 15.000 profesores y estudiantes se manifestaron; y el Sindicato de Estudiantes convoca huelga y manifestaciones el 16, con perspectivas inmejorables. Los trabajadores de la recogida de basura de Valencia amenazan con huelga coincidiendo con las Fallas (en marzo). Los trabajadores sociales y vecinos de Parc Alcosa (barrio de Alfafar, Valencia, muy degradado) llevan semanas luchando diariamente para poder mantener esos empleos y diferentes servicios sociales, mientras un compañero se mantiene en huelga de hambre desde hace más de un mes... ¿A qué esperan las direcciones sindicales para unificar toda esa fuerza, organizando un plan de lucha serio y contundente, y como primer paso convocando una huelga total del sector público valenciano? ¿Por qué no se empieza a preparar ya una huelga general, donde vincular la oposición a todos los recortes con el rechazo a la reforma laboral en ciernes, que será un contundente paso atrás en las condiciones laborales? Somos conscientes de que esas movilizaciones, esas huelgas, exigen mucho más que poner una fecha, exigen una explicación masiva, asambleas bien convocadas y democráticas, reivindicaciones asumidas por el movimiento, oposición efectiva a servicios mínimos abusivos, y sobre todo determinación de luchar, de menos a más, hasta parar los ataques.



Trabajadoras de la limpieza de Eulen en Vialia-Málaga, en lucha por sus derechos

Un ejemplo de dignidad

Juan Carrasco

Delegado sección sindical de CGT-Serunion (Málaga)

Desde el día 10 de enero las trabajadoras de la empresa Eulen, concesionaria del servicio de limpieza de la estación de ferrocarril de Málaga, sostienen una huelga indefinida. Los motivos principales que han generado este conflicto son el incumplimiento de varios acuerdos por parte de la empresa, entre otros, el poder descansar dos días a la semana, o la aplicación del convenio. Tanto Eulen, como ADIF, propietaria de las instalaciones, incumplen sistemáticamente todos los acuerdos vulnerando los derechos de las trabajadoras.

La empresa Eulen, que según los datos de su página web alcanzó en el año 2010 unas ventas consolidadas de 1.343 millones de euros, no paga a los trabajadores con minusvalía el plus que les corresponde, adeuda parte de los salarios en materia de pluses a toda la plantilla, además no aplican el convenio que les corresponde y les están remunerando por debajo de las tablas salariales. Así es como obtienen tantos millones de beneficios. En lo que si se gastan el dinero es en contratar durante la huelga a más vigilantes de seguridad (de dos han pasado a nueve) en un intento de amedrentar a las trabajadoras en lucha, siendo agredidas un grupo de ellas por un vigilante, cuando se dirigían a los baños del centro comercial causándoles contusiones y rompiendo el bolso a una de ellas. También gastan dinero imponiendo la realización de horas extras y contratando a trabajadores en precario para que hagan de esquirol durante la huelga.

El derecho fundamental de huelga de las trabajadoras está siendo vulnerado de forma escandalosa por la empresa que, además de lo dicho más arriba, somete a un ahogamiento económico al comité de huelga, no asignándoles los trabajos de servicios mínimos que les corresponde por turnos como al resto de la plantilla, para así no pagarles nada. Para colmo, el gobierno municipal del PP envió a la empresa municipal de limpieza Limasa para que limpiaran la estación, a lo que se negaron por solidaridad con sus compañeras en huelga y por ser un recinto gestionado por la empresa Vialia, por lo tanto un recinto privado.

Como medidas para continuar con la lucha y obligar a Eulen-Vialia-Adif a cumplir y respetar los acuerdos, las trabajadoras están manteniendo una acampada en las puertas de la estación de ferrocarril, con reparto de octavillas informando del conflicto a los pasajeros y usuarios de las instalaciones, medidas que han tenido una gran acogida entre todos los ciudadanos, distintos colectivos o trabajadores de otras empresas en lucha.

Gran parte de la responsabilidad de que las empresas estén atacando de forma furibunda los derechos fundamentales de los trabajadores, incumpliendo los acuerdos, sentencias judiciales, resoluciones de las administraciones etc., se asienta en la política desmovilizadora de los dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT, que envalentona al empresario, ya que no se organiza ninguna respuesta contundente y coordinada a sus constantes agresiones.

Es necesario unificar todas las luchas que se están desarrollando en Málaga, como la de la empresa municipal de la limpieza Limasa, la de Famf Comemfe Málaga, que se dedica a la integración de personas con minusvalías, la del Hotel Incosol, en concurso de acreedores, etc.

Las trabajadoras de Eulen son un ejemplo para todos y con la lucha que mantienen desde el 10 de enero están demostrando al igual que en otras luchas que se están dando en estos momentos la fuerza que tiene la clase obrera hoy. Esta fuerza bien utilizada, con democracia obrera, uniendo todas las luchas y golpeando todos juntos a la vez, sería imparable.

Despidos de MetaZinco (Asturias) Más de un año reclamando sus indemnizaciones

Desde hace varios meses, trabajadores despedidos de MetaZinco se movilizan para exigir a Macario Fernández, el dueño del grupo, el pago de las indemnizaciones que en algunos casos adeuda desde hace casi dos años. Tratándose de una empresa montada al calor de los fondos mineros, no es extraño que siga la misma suerte que han seguido otras como Alas Aluminium, Venturo o Kerkus, por citar sólo los casos más recientes. Innumerables veces he-

mos denunciado desde estas páginas el entramado infernal que permite a los empresarios enriquecerse a costa de las subvenciones, saqueando las arcas públicas, con la promesa de crear puestos de trabajo que, en última instancia, terminan cerrando cuando se acaban las subvenciones, sin que hasta la fecha haya habido ningún tipo de control, y mucho menos de sanción sobre los gestores y los dueños de dichas empresas.

Mónica Iglesias

'No eran cursillos, era trabajar por seis euros al día'

El caso del grupo MetaZinco (Medina Metal y Meta Aislant) no es diferente, aunque el particular despotismo del dueño lo hace aún más escandaloso. Creada con dinero de los fondos mineros y nutrida con la "carne de cañón" de los trabajadores que accedían a los "cursos de formación" que, como nos recalca uno de estos trabajadores "no eran cursillos, era trabajar por seis euros al día". Ya en la plantilla, debían trabajar dos horas gratis todos los días para "levantar la empresa". Al que un día no se pudiera quedar, se le descontaban o tenía que recuperarlas. En la empresa no había representación sindical, algo que el rechazaba tajantemente, y solía decir que "eramos como una gran familia". Sólo al final, cuando ya la plantilla era muy reducida, contaron con un delegado sindical, en este caso de CCOO.

En cuanto a la gestión, hace un tiempo comienzan los movimientos para ahogar económicamente la empresa y justificar los sucesivos EREs que ha venido aplicando los últimos años. Tras crear MetaZinco Francia para comercializar el producto internacionalmente, crea también Asturiana de Laminados (que ahora es propietaria de MetaZinco Francia) y hacia la que derivan muchos de los beneficios de MetaZinco.

Comienza a despedir a la plantilla de comerciales de MetaZinco, disminuyendo de esa manera el número de pedidos. Por otro lado, la falta de materia prima impide incluso cursar los pedidos con los clientes habituales, lo cual agrava aún más la situación, se produce una falta de liquidez y el cierre de las líneas de crédito. El círculo vicioso que se crea es el caldo de cultivo para provocar una crisis permanente en la empresa que, a día de hoy, mantiene menos de una veintena de trabajadores, sometidos a un nuevo ERE temporal, de varios días a la semana.

Pese a una evidencia tan pública de las prácticas de este empresario, de nuevo el gobierno autonómico (ahora



ya en manos de Foro Asturias, de Alvarez Cascos) le avala para un nuevo crédito de 1,5 millones de euros, que se esfuman misteriosamente en dos semanas, nuevamente sin haber pagado a los despedidos. Y además parece que ha obtenido una nueva subvención en torno a seis millones de euros, bajo la promesa de crear 40 nuevos puestos de trabajo en su nueva empresa, Asturiana de Laminados

¿Sindicalismo amarillo en los sindicatos de clase?

Tras más de un año incumpliendo sus obligaciones respecto al pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos, estos deciden iniciar movilizaciones para reclamar su dinero. Pero la respuesta, en este caso de la Federación de Industria de CCOO, ha sido lamentablemente, la de actuar de portavoz de los intereses empresariales, asumiendo el discurso de que "si pago a los que están fuera, voy a tener que echar a los que están dentro". En esta línea, a finales del año pasado un representante de la Federación accede, a requerimiento del empresario, a redactar un comunicado que posteriormente se publicará en diversos medios de comunicación, firmado por los representantes sindicales, donde textualmente se pide a la empresa que "prioritariamente trate de asegurar la continuidad de los puestos de trabajo actuales". Y

donde supuestamente los trabajadores piden a los despedidos, "que procuren que sus legítimas reivindicaciones no pongan en peligro la continuidad de la empresa".

Ante una actuación tan escandalosa, las explicaciones que reciben de la Federación son totalmente inconsistentes: "que hay muchos expedientes, que no somos la única empresa y que hay que mirar por todos...". Pero en nuestra opinión esta forma de actuar es totalmente inadmisibles y por sí sola justificaría la dimisión inmediata de los responsables de semejante despropósito, que recuerda al sindicalismo amarillo más vergonzoso. Por otro lado, estamos convencidos de que la división de los trabajadores que fomenta este tipo de actuaciones no protegen tampoco a "los que se quedan", sino que fortalecen al empresario y lo envalentonan, para emprender nuevos ataques y más despidos cuando lo considere necesario.

Todo lo contrario, pensamos que el camino es el opuesto: la organización y la movilización del conjunto de los trabajadores para defender los derechos de todos. La unidad es la mayor fortaleza que tenemos. Algo con lo que coinciden los trabajadores con los que nos entrevistamos: "Hay que buscar la unidad de toda la gente que está en el paro y también de toda la gente que está con problemas en muchas empresas, y apretar todos juntos. Quieren que nos bajemos los pantalones los de abajo, no los de arriba, pero eso no va a solucionar nada".

Por su parte, los trabajadores despedidos van a continuar con las movilizaciones reclamando, no sólo su dinero sino que se ejerza un control efectivo sobre la gestión de estas empresas beneficiarias de dinero público. Una reivindicación que es un clamor en las comarcas mineras y en toda Asturias, sistemáticamente desoído por los sucesivos gobiernos. Como decía otro trabajador: "da la sensación de que aquí ganan todos, gana el que recibe la subvención, gana el que la gestiona y el que la da...".

Un ejemplo de la política social del PP

El mes pasado, la Xunta de Galicia instaló dos bateas de depuración de marisco. Como los resultados de los análisis finales fueron negativos, la jefa de Recursos Marinos de la Xunta pidió directrices sobre qué hacer con ese marisco que no podía ser comercializado por estar demasiado contaminado: "¿Se resiembraba o se le da a los pobres?". O sea, que al PP le parece que lo que no es apto pa-

ra la gente "normal", sí puede serlo para aquellas personas que tienen la desgracia de verse obligados a acudir a un comedor social para poder comer. Apesta a esa falsa caridad cristiana en que los pobres deben contentarse con lo que las personas "respetables" tengan a bien darles, eso sí, siempre y cuando sepan cuál es su sitio en esta sociedad y se resignen al *statu quo*.

Entrevista a Alba Luna, delegada de personal en CIC (El Prat de Llobregat)

Readmitida gracias a la lucha, tras un despido por persecución sindical

“No sólo nos despiden, sino que además pretenden hundirnos y humillarnos”

EL MILITANTE.— Antes de nada, enhorabuena por tu readmisión en el Centro Inmunológico de Catalunya (CIC). ¿En qué condiciones se ha producido?

Alba Luna.— Gracias. Pues en primer lugar retiraron la demanda que pusieron en contra de las elecciones en las que salí elegida delegada y se pusieron en contacto con mi abogado para explicarle que me readmitirían en el mismo puesto que antes y con las mismas condiciones y que pagarían al Servei d'Ocupació de Catalunya los salarios de tramitación. La empresa sólo exigía que cesara ya la campaña de envío de resoluciones de solidaridad que estaban llegando de todas partes. Firmamos la readmisión el miércoles 25 de enero y llevo desde el 26 de enero reincorporada en la empresa.

EM.— ¿Cómo se produjo tu despido?

AL.— Decidí presentarme a las elecciones sindicales que se tenían que celebrar el 28 de octubre junto a mis compañeras de CCOO que ya eran delegadas. El 28 de septiembre, justo un día antes de que se hicieran públicas las listas de los candidatos a las elecciones, me llamó a su despacho el director general de CIC, Joan Carles Serrat (que antes era el presidente ejecutivo) y me entregó una carta de despido llena de calumnias: me acusaban de negligencias, faltas de disciplina... ¡En cuatro años en la empresa no he tenido ninguna sanción y, de golpe, esto! Era un despido disciplinario sin ningún tipo de indemnización. Esta clase de gente no sólo nos despiden, sino que además nos hunden y pretenden humillarnos y más. Un personaje como este, cuya actitud con las trabajadoras de CIC siempre ha sido de desprecio, hace cuatro años ya intentó boicotear las elecciones

sindicales. Además, le gusta hacer comentarios ofensivos como, “deberíais darme las gracias porque si no fuera por mí seríais unas ni-nis”, o incluso dijo que por qué las embarazadas se cogían bajas, que estaban embarazadas y no enfermas. A una de las delegadas de CCOO la puso durante una temporada “contra la pared”, a mí me llamaba *la jarrai...* Habría numerosos ejemplos. Con mi despido pretendía dejar la puerta abierta a echar a cualquier persona con despido disciplinario inventándose cualquier excusa y crear un clima de miedo y presión constante. Era un caso claro de represión sindical.

EM.— ¿Cómo conseguiste la readmisión?

AL.— Primero tenía que lograr mantenerme como candidata en las listas de las elecciones. Para evitarlo, la empresa me quitó del censo, así que tuve que recurrir a las elecciones: fuimos a arbitraje, allí me dieron la razón y se repitieron las elecciones conmigo como candidata. El día de las elecciones salí delegada con el apoyo mayoritario de la plantilla. Abrimos una caja de resistencia y siendo ya delegada me empecé a poner en contacto con los comités de empresa y las secciones sindicales de otros laboratorios de Labco y los clientes de CIC y llevamos a cabo una campaña estatal de resoluciones: las recogíamos en las empresas donde previamente había hablado con el comité o delegados, en manifestaciones etc. Conseguimos por todo el Estado, Asturias, Madrid, Catalunya... Por suerte, no fue necesario enviarlas todas.

EM.— Suponemos que la solidaridad dentro de la plantilla de CIC sería muy importante para conseguir tu readmisión.

AL.— Por supuesto. Tenía el apoyo de muchas de mis compañeras porque entendían que no sólo era un ataque contra mí sino contra todas. Durante los meses que estuve fuera estuve en contacto con muchas de ellas y por supuesto con las delegadas. Hicimos una asamblea en octubre en un bar de El Prat (no teníamos otro sitio donde hacerla), la cual fue una vía para que todas habláramos sobre la situación de la empresa y de las compañeras. Luego el apoyo en las elecciones... Un par de ejemplos: las compañeras me mantuvieron en la Lotería Primitiva que echamos todas las semanas y en navidades me invitaron a la cena de la empresa (que organizan y pagan las trabajadoras).

EM.— Has dicho que la asamblea la hicisteis en un bar, ¿no os dejó la sala CCOO? ¿Cuál ha sido el papel del sindicato en toda la campaña?

AL.— CCOO se mantuvo a mi lado en el tema judicial, fueron al arbitraje y hablaron en mi favor, pero desgraciadamente no es sólo eso. Me encontré con algunos jarros de agua fría, el sindicato no quería organizar ninguna campaña de solidaridad, lo limitaba todo al tema legal y no creían que pudiera conseguir el despido nulo, como mucho el improcedente. Las resoluciones las conseguimos entre los compañeros de EL MILITANTE con nuestro material y nuestro tiempo y ¡lo hemos conseguido! ¿Os imagináis lo que podríamos conseguir si los grandes sindicatos recuperaran las tradiciones del sindicalismo más combativo? Eso es lo que necesitamos los trabajadores, que los sindicatos sean combativos de verdad y que practiquen un sindicalismo de clase.



Eso sólo lo podremos conseguir luchando desde dentro de estos sindicatos.

EM.— Y ahora que has vuelto a CIC, ¿cómo está la situación?

AL.— Las compañeras están contentas porque han visto que luchando se pueden conseguir cosas, pero hay aún mucha lucha por delante. La empresa fue comprada por otra empresa, Labco, en un conjunto de fusiones que se están dando, la faena está bajando y lógicamente la situación de la sanidad pública también está afectando a la sanidad privada. Nos quedan por aguantar muchas presiones, pero somos más optimistas porque hemos comprobado que la lucha sirve.

EM.— ¿Alguna otra cuestión que quieras comentar?

AL.— Sí, que durante estos meses en los que he estado despedida he podido ver la peor cara de esa clase social que pretende hundir a los trabajadores día sí y día también. Pero también he podido ver la mejor cara de la gente de mi alrededor que me ha apoyado: mis compañeras de trabajo y las dos delegadas, el Colectivo Ronda de abogados, mis amigos, mi familia, mis compañeros de EL MILITANTE y mi pareja. ¡Sin vosotros no sé si hubiera podido llegar hasta aquí! Los capitalistas tendrán los bolsillos llenos de billetes, pero tienen el corazón podrido, no entienden de solidaridad y de compañerismo. ¡Gracias!

Eulen Girona

Continúa la campaña por la readmisión inmediata de Ana Pozo y la retirada de todas las sanciones

EL MILITANTE

Como explicábamos en el último número de EL MILITANTE, Ana Pozo, responsable de la Federación de Limpieza de CGT en Girona, fue despedida el pasado 20 de diciembre de la empresa Eulen después de 21 años de trabajo, mediante un despido disciplinario, achacándole haber faltado de su puesto de trabajo durante 50 minutos. Realmente, su despido es la respuesta de la empresa a años de actividad sindical. La compañera juega un papel muy importante entre las trabajadoras de la limpieza, trabajadoras muy explotadas pero que se resisten a perder la dignidad. Aparte del despido, cinco delegadas sindicales (4 de CGT y 1 de CCOO) fueron sancionadas por la empresa a 16 días sin empleo y sueldo por cumplir con sus responsabilidades como sindicalistas: informar a sus compañeras de trabajo de los acuerdos de una reunión sobre prevención de riesgos laborales. Además la empresa amenaza a las trabajadoras con despedirlas si se ponen en contacto con el comité de empresa.

Desde entonces se viene desarrollando una intensa campaña de solidaridad con las compañeras afectadas. Sabemos que no podemos simplemente confiar en la buena vo-

luntad del juez así que necesitamos llevar la lucha fuera de la empresa, explicando al conjunto de la clase obrera de Girona lo que está sucediendo y presionando al Ayuntamiento para que no se lave las manos.

El 4 de enero se realizó una primera concentración de protesta delante de la escuela pública Joan Bruguera, donde trabaja Ana Pozo. Como Ana Pozo ha explicado en numerosas ocasiones, la limpieza en la educación pública es una tarea fundamental. El ayuntamiento está demostrando que no le importa las condiciones en las que se encuentran los colegios porque por un lado recorta el presupuesto y por otro lado permite que Eulen y las otras empresas encargadas de la limpieza, despidan a trabajadoras y empeoren el servicio que ofrecen. Por eso era muy importante llevar la denuncia de la represión sufrida en la empresa a los maestros y a los padres de los alumnos, para que comprendan que la lucha contra la represión sindical y la lucha por la educación pública es la misma lucha.

Manifestaciones y recogida de firmas

El 13 de enero CGT y CCOO organizaron una concentración de delegados en la plaza



Ana Pozo, segunda por la derecha, con el micrófono

del ayuntamiento de Girona con unos 200 asistentes. Las trabajadoras han conseguido la unidad sindical en la lucha, por encima de banderas y siglas, para defender todos los puestos de trabajo y la libertad sindical. La concentración se convirtió en manifestación pacífica hasta la sede de Eulen en la ciudad. Las trabajadoras coreaban consignas como “Menos sanciones, más contrataciones”, “Libertad sindical”, “Limpiaadoras unidas, jamás serán vencidas” “Carles Puigdemont —alcalde de Girona— estás con el patrón”, “Todos somos Ana Pozo”... El viernes siguiente, 20 de enero, se organizó una nueva movilización, en este caso una manifestación convocada por CGT y apoyada por CCOO que contó también con unos 200 asistentes.

Las trabajadoras están también participando en las movilizaciones sociales que se están desarrollando en Girona (como la movilización contra los recortes sociales del 18 de enero), están recogiendo firmas contra el despido y las sanciones y están distribuyendo miles de hojas informativas para informar a toda la clase obrera de Girona en colegios, el campo de fútbol del Girona, etc. El próximo 3 de febrero se celebra el acto de conciliación donde las trabajadoras organizaran una nueva concentración de solidaridad.

La campaña de protesta continúa. La unidad de todos los trabajadores es la única defensa que tenemos frente a los atropellos de los empresarios. No puede haber una educación pública de calidad, sin una limpieza de calidad, donde se garanticen buenas condiciones laborales a las trabajadoras. Los recortes nos están afectando a todos, además, cualquier paso atrás en los derechos sindicales significará más retrocesos, más despidos y más injusticias.

**Todos somos Ana Pozo
Participa en la campaña de solidaridad
Envía tu resolución de protesta**

Toda la información en www.elmilitante.net

29 de febrero

Huelga de los trabajadores de la Junta de Castilla - La Mancha

Es necesario un plan de lucha a la altura de los ataques

Rodrigo Pasero

El pasado 2 de diciembre, M^a Dolores de Cospedal anunciaba la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Básicos, es decir, la versión 2.0 de los recortes que se anunciaron el mes de septiembre. Estos recortes van un poco más allá y suponen un paso más en el proceso de privatización de los servicios públicos. Dicho plan recorta una media del 3% el salario a los empleados públicos que dependen de la Junta, a la vez que aumenta la jornada laboral en dos horas y media semanales. Esta medida supondrá, en la práctica, el despido masivo de interinos en la administración pública.

Se aplicará un ERE de cinco meses al año a los trabajadores forestales. También se recorta un 52% del presupuesto el dispositivo contra incendios. En Castilla-La Mancha la superficie forestal representa aproximadamente un 45 %, por tanto, el riesgo de incendios en verano, si no se toman las medidas de prevención adecuadas durante todo el año, es muy alto.

En el caso de los Servicios Sociales las medidas anunciadas por el gobierno regional significan el desmantelamiento de toda la red de atención a las mujeres maltratadas

y prevención de maltrato de género, todos los recursos de atención a inmigrantes, familias desestructuradas, jóvenes en situación de riesgo, infancia desprotegida, en los servicios sociales especializados sólo se mantendrán los convenios con empresas privadas. Además, se dejan de percibir las mensualidades de los cuidadores en el entorno familiar de las personas dependientes, además del incumplimiento de otros muchos puntos de la Ley de Dependencia.

Nada se salva de la quema

Por si ello fuera poco, se profundiza el proceso de privatización de la educación iniciado en septiembre, priorizando la promoción de los centros de enseñanza privados-concertados. Buena prueba de ello es el hecho de que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan haya cedido unos terrenos públicos, en los que se iba a construir un centro público de enseñanza, para la construcción de uno concertado. Además, se elimina el programa de gratuidad de libros, se reducen 53,5 millones de euros para la universidad además de reorganizar el transporte escolar.

La sanidad pública tampoco se salva de la quema. El plan también incluye la privatización de la gestión de los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso, así como todos los que se construyan

en el futuro. Los recortes sanitarios han obligado a cerrar plantas en varios hospitales.

Este ataque va más allá de recortes en las condiciones laborales, significa la degradación absoluta de los servicios públicos. El actual modelo público de sanidad, educación y de los servicios públicos en general es una conquista, un derecho gracias al cual, las familias trabajadoras no debemos pagar por ir al médico o por escolarizar a nuestros hijos entre los 3 y los 18 años. Las medidas que ha anunciado el gobierno regional pretenden convertir a los servicios públicos en un lucrativo negocio para unos pocos a costa de terribles dificultades para la aplastante mayoría.

Represión y criminalización del profesorado en lucha

Además de lo que suponen los recortes en sí mismos, el gobierno de Castilla - La Mancha lanzó, a raíz de las protestas del 7 de septiembre en Guadalajara, una campaña de criminalización del movimiento de los profesores que ha culminado con una denuncia por resistencia y desobediencia a la autoridad contra cinco compañeros que participaron en las protestas. Quieren demostrar que como en los tiempos más oscuros de nuestra historia luchar puede traer consecuencias penales. Sin duda, el hecho de que sean tan sólo cinco los denunciados demuestra el

carácter político de esta denuncia. Entre los centenares de personas que acudimos al Teatro Buero Vallejo han escogido sólo a unos pocos para intentar dar una lección y atemorizar a los que se manifiestan en contra de los recortes. El único delito que cometieron estos compañeros fue luchar en defensa de la educación pública.

Después de las movilizaciones del trimestre pasado contra los recortes en educación, la lucha ha pasado a un nuevo nivel. Ahora el ataque es contra el conjunto de los servicios públicos y por lo tanto la respuesta ha de ser unificada. Es necesario que los dirigentes de CCOO y UGT organicen asambleas de trabajadores en todos los centros de trabajo y las coordinen tanto a nivel provincial como regional para decidir cuales tienen que ser los siguientes pasos en la lucha. La convocatoria de una manifestación unificada en Toledo el 11 de febrero y la huelga de los trabajadores de la Junta de Castilla - La Mancha el día 29 son un paso adelante en la lucha, pero es insuficiente. Es necesaria la unificación también, con los trabajadores de todas las empresas que prestan servicios a la Junta y con el conjunto de los trabajadores con la organización de una gran huelga general en Castilla - La Mancha en defensa de los servicios públicos. Los ataques no sólo son contra los empleados de la administración, son contra los servicios públicos de los cuales se benefician el conjunto de los trabajadores.

Barcelona El ambiente recuerda la lucha por los "dos días" de 2007-08

Fernando Setién

El pasado 26 de enero se celebraron en Barcelona dos concentraciones conjuntas de trabajadores de TMB de Metro y Autobuses, una a las 9:30 h y otra las 16:00 h. En total participaron en torno a 5.000 trabajadores. Posteriormente, ambas se convirtieron en manifestaciones que culminaron en la plaça Sant Jaume, donde se abrieron turnos de palabras, con el fin que todos los trabajadores que quisieran hablar pudieran hacerlo.

El electrificante ambiente de las concentraciones recordaba el de la histórica lucha por los "dos días" de descanso en 2007-08, que todavía perdura en la memoria de miles de trabajadores, que comprobaron en la práctica que el sindicalismo participativo y combativo es mil veces más efectivo que el sindicalismo de acuerdos y despacho.

Uno de los aspectos más significativos ha sido la unidad de acción existente entre los trabajadores de Metro y Autobuses, unidad que genera auténtico pavor al Ajuntament gobernado por CiU, que intentará por todos los medios dividir a las dos plantillas. También significativa ha sido la unidad de acción de todos los sindicatos de ambos comités que hasta ahora han demostrado que están dispuestos a llevar, sin fisuras, la lucha adelante. En este sentido, la sensación de fuerza y unidad y la confianza de los trabajadores en sus posibilidades era enorme.

Política de recortes por parte de la empresa

Tanto el gobierno central como el de la Generalitat llevan años lanzando ataques tras ataques sin otro objetivo que trasvasar dinero pú-

Masiva concentración de trabajadores de TMB (metro y autobuses)



Asamblea de los trabajadores de TMB (metro y autobuses) el 8 de febrero

blico a los bolsillos de los grandes capitalistas y banqueros. Por eso deterioran los servicios públicos como la sanidad o la educación. En este sentido el transporte público no es una excepción y la empresa ya está actuando.

Se han producido 36 despidos, se han recortado servicios en algunas líneas, con la consiguiente carga de trabajo para muchos conductores que tienen que prestar el mismo servicio con menos coches. Todavía no se han abonado los atrasos de 2011 y tampoco se han actualizado las tablas salariales de 2012. La empresa también ha advertido que la paga extra para los trabajadores de Metro está en peligro, dados los problemas de liquidez de la misma. En total se exige a los trabajadores una reducción de masa salarial de 14 millones de euros en ambas empresas si se quiere evitar un ERE.

A pesar de la petición por parte de los comités de las cuentas de la compañía, ésta se niega en redondo, sabedora del escándalo que supondría sacar a la luz los desorbitados

salarios de muchos directivos que están sangrando las cuentas de la empresa, sin saberse muy bien cual es realmente su aportación.

Paro y asamblea el 27 de febrero

La respuesta de los trabajadores no se ha hecho esperar. Frente a los ataques, las plantillas de ambas empresas ya han puesto un plan sobre la mesa. Después de un acalorado turno de palabras en Sant Jaume, que denotaban las ganas de lucha, finalmente se decidió, por aclamación, hacer un paro y asamblea el próximo 27 de febrero, coincidiendo con el Mobile World Congress que se celebrará en Barcelona en esas fechas y que, entre otras cosas, es un escaparate mundial para explicar al mundo ¡lo bonita que es Barcelona y lo bien que se vive!

Dicha asamblea se celebrará en las inmediaciones de la feria y allí, tal y como se explicó, se decidirá, en función de la respuesta que dé la empresa, qué plan de lucha se llevará

adelante. Sin duda, la experiencia de la lucha por los dos días de descanso y la posterior lucha por el convenio está muy presente. Los trabajadores no van a renunciar fácilmente a sus conquistas, son conscientes que sólo la participación y la movilización puede salvar sus puestos de trabajo y sus condiciones de vida.

Una lucha en las mismas líneas que en 2007-08 tendría un efecto revitalizador en todo el sector público, auténtica punta de lanza de los ataques de la burguesía.

La unidad de todas las luchas que están habiendo en el sector público se hace ahora imprescindible si se quiere parar de manera contundente los ataques. La dispersión de las luchas debilita al movimiento y le ahorra a la burguesía el aplicar la táctica del "divide y vencerás". Las negociaciones y el sindicalismo manso, que las direcciones de los grandes sindicatos llaman "responsable", ha demostrado en la práctica que sólo sirven para firmar acuerdos que se traducen en derrotas.

Última hora.- El 8 de febrero, la asamblea de trabajadores de metro y bus unificada decidió por abrumadora mayoría convocar huelga del 27 al 1 de marzo, coincidiendo con la Fira del Mòvil, y asamblea en Pl. Espanya. La huelga será efectiva el primer día y la asamblea decidirá renovar o no la convocatoria cada día. La propuesta inicial de los dos comités era un solo día de huelga pero en las intervenciones prevaleció la ampliación a toda la Fira. Además, la asamblea ha votado que se mantenga la unidad de los dos comités hasta el final.

Astilleros Navantia Unificar la lucha y armarla con una estrategia de clase

Javi Losada, Xaquín G^a Sinde, Carmen Sixto y Vicente Ferrer
Ejecutiva de CCOO en Navantia-Ferrol,
por el Sector Crítico



Tras un parón de más de dos meses tras una gran manifestación comarcal el día 6 de noviembre y unas elecciones generales ganadas por el PP con mayoría absoluta, los trabajadores de los astilleros Navantia en la ría de Ferrol hemos retomado las movilizaciones en demanda de un dique flotante que palíe la ya muy próxima caída en la carga de trabajo, que significaría —que ya está significando— el despido de miles de trabajadores.

El 31 de enero se realizó una nueva asamblea conjunta de los trabajadores de la plantilla principal y de la industria auxiliar, donde se aprobaron dos movilizaciones: salir ese mismo día al ayuntamiento para pedir al alcalde (PP) su implicación a la hora de presionar a un gobierno central que ahora sí es de su partido y una marcha andando a Coruña de los delegados sindicales los días 7, 8 y 9 de febrero, a la que se unirán las plantillas el último día para manifestarnos hasta la Delegación del Gobierno.

La afluencia de miles de trabajadores a la asamblea indica, por una parte, las ganas y ambiente de lucha que existe y, por otra, debería desterrar de una vez por todas la intención del comité de empresa de dividir a los trabajadores, que hasta hace poco se oponía a las asambleas conjuntas alegando la existencia de una serie de prejuicios, que es verdad que existen, pero en gran medida porque el propio comité los fomentó.

Un punto de inflexión en la lucha

Debido al malestar provocado por el incesante goteo de despidos en la industria auxiliar, cuya máxima expresión fue la ini-

cial oposición de los trabajadores de tres compañías auxiliares a las movilizaciones por entender que llegaban muy tarde, parte del comité de empresa realizó un discurso más combativo, como la toma del ayuntamiento, a la cual rápidamente la asamblea respondió con buen ánimo, aprobando por unanimidad el plan de movilizaciones. Posteriormente, un numeroso grupo de trabajadores entramos en el ayuntamiento mientras el alcalde estaba reunido con los dos comités de empresa de Navantia en la ría de Ferrol, para recordarle al alcalde sus promesas durante la campaña electoral de noviembre. La respuesta del alcalde fue que la policía municipal nos rociase con gas pimienta.

Estos acontecimientos evidencian una serie de cuestiones:

1.- No es cierto que los trabajadores no queramos luchar, como se demostró en el momento que el comité introdujo algún elemento de combatividad en su discurso. De hecho, en realidad los trabajadores muestran mucha más disposición a la lucha que los dirigentes sindicales, que solamente dan pasos adelante cuando sienten la presión desde abajo. En este sentido, la toma del ayuntamiento fue un cierto punto de inflexión que revela que el comité de empresa no va a poder seguir limitándose a movilizaciones para cubrir el expediente. Y si lo hace, correrá el riesgo de ser desbordado.

2.- La posición del alcalde echando balones fuera una vez pasadas las elecciones (el presidente del comité de empresa reco-

noció después de la entrevista con él que nos había utilizado electoralmente) demuestra lo que tantas veces hemos explicado los marxistas: nuestras demandas y nuestras luchas no pueden ir de la mano de la derecha, y el tiempo terminará demostrando que tampoco podemos ir de la mano con los empresarios, porque los intereses que nos unen son los mismos que unen a esclavos y amos.

3.- La gravedad de la situación general, en donde no son los gobiernos nacionales quienes deciden la política que aplican, sino el capital internacional, convierte en ilusoria cualquier esperanza de resolver nuestro problema concreto con una lucha aislada cuyo máximo horizonte es la comarca de Ferrol.

El sector naval en Vigo, San Fernando y Puerto Real, también en lucha

El problema no radica en que los trabajadores no estemos dispuestos a luchar, sino que los dirigentes sindicales carecen de estrategia, simplemente responden a los acontecimientos sobre la marcha. Comenzaron defendiendo una alianza con cualquiera que reivindicase el dique flotante, daba igual el color político porque “se trata de sumar fuerzas”. Ahora, nueve meses y 800 trabajadores despedidos después, descubren que el PP nos ha utilizado y parece que por fin se van a ver obligados a luchar de una forma más decidida.

Si esto se confirma sería un paso adelante evidente y de gran importancia, que aun no siendo suficiente por sí mismo, es imprescindible si queremos conseguir trabajo. La clave ahora, como venimos repitiendo los marxistas, es dotarnos de una estrategia basada en la confluencia con otros trabajadores y en insertar nuestra lucha en la lucha del conjunto de la clase obrera por evitar que la crisis la paguemos los trabajadores.

Los ataques que estamos sufriendo, y los que vendrán, no son producto de una confabulación del gobierno contra los trabajadores de los astilleros de Ferrol, sino un ataque del gran capital (banqueros y empresarios) contra toda la clase obrera, que nosotros, como parte de ella, estamos sufriendo. Por supuesto que debemos reivindicar el dique flotante, pero al mismo tiempo debemos comprender que si nos dicen que el Estado, propietario de Navantia, no tiene dinero para esa inversión, esto se debe a que les están dando todos los recursos a los banqueros y empresarios. Por eso tenemos que armarnos con un discurso de denuncia del capital como máximo responsable de nuestra situación y enmarcar nuestra lucha en una lucha general de los trabajadores por evitar que nos hagan pagar su crisis. Esta estrategia, además de ser la única con garantía de éxito, es profundamente práctica porque la mejor fórmula para arrancarles algo es que temen perderlo todo.

En este sentido, debemos confluir ya mismo con todas las luchas del sector naval. ¿Cómo es posible que los trabajadores del naval de Vigo y nosotros estemos peleando por separado cuando el problema (la amenaza del paro) es exactamente el mismo? Y lo que es peor, el mismo día que tomábamos el ayuntamiento de Ferrol, nuestros compañeros de Navantia de Puerto Real tomaban el puente de la bahía de Cádiz en demanda de un trabajo que se termina en 15 días, hecho sobre el que el comité de empresa mantiene totalmente desinformados a los trabajadores de Ferrol. También los compañeros de San Fernando, otra de las factorías de Navantia en la bahía de Cádiz, se encerrarán en el recinto en demanda de carga de trabajo. Unificar las luchas de los trabajadores del sector naval es una prioridad en nuestra lucha. Mantener las luchas separadas sólo puede perjudicarnos a todos.

Colapso de Spanair: ¡la Generalitat, responsable!

Por el mantenimiento de los 4.600 puestos de trabajo, ¡nacionalización de Spanair y Newco!

Jaume García

La polémica aerolínea Spanair colapsó el pasado 27 de enero. La empresa deja a 2.604 trabajadores directos y a otros 2.000 indirectos (de la empresa Newco) sin ningún tipo de perspectiva de futuro, 474 millones de euros de deuda y más de 80.000 viajeros sin vuelo. Es un gran fracaso del empresariado catalán que, con el dinero de la Generalitat, pretendía crear una aerolínea que les permitiera, además, controlar el aeropuerto del Prat.

Dicen los manuales del “buen emprendedor”, que los empresarios arriesgan su dinero para generar riqueza y crear empleo. Quizás eso fue así en el pasado legendario del capitalismo, pero hace ya tiempo que esa época ha pasado. Ahora lo “moderno” es utilizar el Estado y el dinero público. El esquema es sencillo: es el dinero público es el que se arriesga al servicio del empresario privado y si el negocio funciona, pues a poner la mano. ¿Pero si el negocio no funciona?

Tras la catástrofe de Barajas de agosto de 2008 en la que murieron 154 personas y a través de una sociedad llamada Inicia-

tives Empresariales Aeronàutiques (IEASA), la burguesía catalana compraba la, ya entonces deficitaria, empresa Spanair a la multinacional sueca SAS. Los “patrióticos” empresarios se frotaba las manos: a través de Spanair esperaban, por un lado, tener una compañía aeronáutica de referencia en todo el mundo, capaz de competir con las grandes compañías como Iberia. Además, si Spanair medraba, controlarían en la práctica el aeropuerto del Prat, con todos los jugosos negocios que eso suponía. ¡Y todo sin arriesgar ni un euro! Efectivamente, desde el principio IEASA fue posible gracias al dinero público. En su accionariado destacan las empresas públicas y mixtas Turisme de Barcelona, Catalana d’Iniciatives y Fira de Barcelona pertenecientes a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona. La implicación del entonces alcalde de Barcelona, Hereu del PSC y de otros altos cargos del Tripartit y de CiU era total.

Desde entonces, la empresa ha recibido, que se sepa, 180 millones de euros de la Generalitat (ya gobernada por CiU) y del ayuntamiento de Barcelona. Una cantidad insultante de dinero incapaz de cubrir el pozo sin fondo en que se había convertido la empresa. Pero que nadie se equivo-

que: la empresa no era pública. Aunque más del 85% del accionariado pertenece a sociedades públicas, Spanair seguía siendo un negocio privado gestionado por el oscuro yupi Ferrán Soriano, exvicepresidente del Barça en la época de Laporta. Muchos especialistas del sector achacan a su nefasta gestión buena parte de las pérdidas de la compañía. Por supuesto, las otras empresas aeronáuticas se frotan las manos por el pastel que deja Spanair, sobre todo Vueling —presidida por Piqué, ex ministro del PP—, Ryanair e Iberia.

Garantizar los puestos de trabajo y el servicio de calidad

Aparte de las reclamaciones de las decenas de miles de viajeros afectados, la empresa ha dejado completamente tirados a los trabajadores. Ha planteado un ERE de extinción y dice haber aportado un adelanto de 1.000 euros del salario de enero, sin embargo muchos trabajadores niegan que se haya dado ese cobro salarial. Los comités de empresa están discutiendo movilizaciones a través de asambleas de trabajadores y ya se han producido encierros en el aeropuerto de Bilbao y cortes de la Gran Vía en L’Hospitalet.

La responsabilidad de todo lo sucedido lo tiene la Generalitat. Es la Generalitat por tanto la que tiene que responder por los cerca de 5.000 puestos de trabajo que han sido destruidos. Soriano y los demás directivos y cargos públicos implicados deberían de ir directamente a la cárcel por malversar dinero público y sacar de sus cuentas bancarias el dinero para garantizar la nómina de los trabajadores. Pero, además, los sindicatos deben exigir la nacionalización de Spanair y Newco sin ninguna indemnización para sus propietarios y accionistas, para así mantener el servicio y garantizar los puestos de trabajo. En el pasado había aerolíneas públicas, ¿por qué no puede volver a haberlas? Además así se podría garantizar, mediante el control de los trabajadores, un servicio de calidad y seguro para que tragedias como la de 2008 no se vuelvan a repetir.

Pero Spanair también es muy instructivo a cerca del papel que juegan hoy en día los capitalistas: actúan como verdaderos parásitos utilizando el Estado como una herramienta más con la que conseguir beneficios millonarios, sin importarle los efectos sociales que tienen sus acciones, ya sea destruir la vida de 5.000 personas o dejar incomunicados a más de 80.000.

MADRID 'ley escoba' y nuevas privatizaciones

Por una huelga general contra los recortes de Esperanza Aguirre

Carlos Ramírez

El pasado 7 de febrero en torno a 150.000 personas se manifestaron en Madrid contra los recortes del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid (CAM). Miles de profesores, padres y estudiantes, funcionarios, trabajadores de metro, bomberos, agentes forestales, etc, inundaron el centro de la ciudad para mostrar su rotundo rechazo a la política general del gobierno presidido por Esperanza Aguirre y más en concreto a las medidas aprobadas en la Asamblea de Madrid el mes de diciembre de 2011.

El gobierno de la CAM elaboró la "Ley de Medidas Fiscales de la CAM", también llamada *ley escoba*, antes de las elecciones del 20-N. Una vez celebradas, en su estilo característico traicionero y de trilerio incorregible, el PP madrileño presentó y aprobó en diciembre pasado, toda una serie de "enmiendas" que suponen un ataque en toda la línea de flotación para las condiciones de trabajo de los funcionarios y trabajadores públicos en general.

De las 25 enmiendas presentadas, las más sangrantes son: en el régimen general, que es el que tienen 107.000 trabajadores (administrativos, justicia, bomberos, docentes...), la Comunidad o la Seguridad Social, dependiendo del tramo, pagaban el 60% del salario entre el cuarto día de baja y el vigésimo. Madrid aportaba un 40% más hasta llegar al sueldo íntegro en virtud de acuerdos y convenios

colectivos con sus trabajadores. Con esta enmienda esos acuerdos han quedado en papel mojado. A partir del 1 de enero el empleado público que se encuentre de baja por enfermedad cobra un 40% menos tanto si pertenece al régimen general, como al de mutualismo o al estatutario.

Otra de las enmiendas estipula que todos los funcionarios y empleados públicos madrileños trabajarán 37,5 horas a la semana, 2,5 más que hasta ahora. La medida afectará a 120.000 de los 170.000 trabajadores del sector público. La mayor parte de los afectados son trabajadores sanitarios, unos 66.000. Según los sindicatos, esta medida provocará el despido de en torno a los 11.000 interinos en todo el sector público madrileño.

Privatizaciones en marcha

Estas "iniciativas" van a ser acompañadas de un nuevo impulso a las privatizaciones. Esperanza Aguirre ha confirmado que pretende privatizar el Canal de Isabel II. También, según anunció hace pocos días *The Financial Times*, el gobierno de la CAM tiene la intención de privatizar Metro de Madrid y aunque Aguirre ha desmentido que vaya a hacerlo, todo parece indicar que ha lanzado un globo sonda para ir tanteando el terreno.

Todas estas medidas se suman a los recortes en educación, sanidad, etc., que se han producido a lo largo de 2011.

El PP sigue desoyendo las demandas de los trabajadores y despreciando los llamamientos de los sindicatos a la "nego-

ciación". El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, declaró que los sindicatos "se equivocan gravemente al convocar huelgas políticas y no leer los resultados de las elecciones". Además, puntualizó que las medidas que está tomando el Gobierno son "reformas", no recortes, en un nuevo alarde de cinismo destilado. Por un lado los trabajadores del sector público han dado sobradas muestras de que están dispuestos a luchar y por el otro el PP parece ignorar la creciente oposición a sus recortes sociales.

Hay que dar un paso más contundente en la lucha

La lectura que deberían hacer los dirigentes de CCOO y UGT es clara: no va a ser con llamamientos a la negociación lo que va a hacer retroceder al gobierno de la CAM.

Las manifestaciones masivas han confirmado una vez más que los trabajadores tenemos fuerza suficiente para derrotar los planes del PP; esto, y la arrogancia rancia de la derecha, demuestran que es necesario dar un paso más en la lucha. Hay que convocar una huelga general de todo el sector público en Madrid como paso previo a la convocatoria de una huelga general de todos los sectores en Madrid. Con un plan de lucha decidido, dando los sindicatos muestras de que están dispuestos a continuar la lucha hasta el final, veríamos si Esperanza Aguirre y el PP madrileño iban a seguir permaneciendo tan tranquilos.

Provocación fascista en Avilés

El pasado lunes, a la llegada al local que la Fundación Federico Engels comparte con el Sindicato de Estudiantes en Avilés, Asturias, nos encontramos con que algún individuo nos había colocado en la fachada una pegatina de grandes dimensiones donde se pedía la libertad para Pedro Varela, el dueño de la librería Europa, actualmente en prisión por delitos relacionados con la apología del fascismo, entre otros, negar el Holocausto judío durante el nazismo.

Se da la circunstancia de que el Sindicato de Estudiantes ya ha sufrido en el pasado amenazas de grupos ultraderechistas, e incluso uno de sus afiliados sufrió una agresión hace algunos años por parte de un conocido fascista de la localidad. Por supuesto, en aquella ocasión no nos quedamos de brazos cruzados, sino que organizamos concentraciones para denunciar públicamente esta agresión, y también pusimos una denuncia en los juzgados que se saldó con un fallo a nuestro favor. Lamentablemente, como suele ocurrir con este tipo de delitos, la pena impuesta fue totalmente insuficiente, unos 150 euros de multa.

Tampoco en esta ocasión queremos dejar pasar esta provocación e inmediatamente pusimos una denuncia en la comisaría, para dejar constancia de lo sucedido. No se trata de generar una alarma innecesaria pero sí de tomarnos con total seriedad cualquier amenaza o provocación fascista por pequeña que sea. Frente a este tipo de acciones, seguimos reivindicando la unidad y la solidaridad de los trabajadores y de las organizaciones de la izquierda como la mejor manera de combatir y aislar a los fascistas.

Nuevo número de la revista MARXISMO HOY

Dedicada íntegramente a los acontecimientos revolucionarios que sacuden Oriente Medio y el Magreb. Con la publicación de esta extensa recopilación de artículos, incluyendo las declaraciones fundamentales de la Corriente Marxista Revolucionaria (CMR), queremos contribuir desde el punto de vista marxista al debate que se desarrolla en el seno de la izquierda internacional. La naturaleza de la revolución árabe, la cuestión de las tareas democráticas y la lucha por el socialismo, el papel activo del imperialismo para derrotar la revolución y otros factores como el fundamen-

talismo, han generado una enorme confusión entre los activistas de izquierda, incluidos dirigentes latinoamericanos con una enorme proyección pública. Profundizar en el análisis defendiendo una posición clasista; comprender las auténticas fuerzas motrices de la revolución huyendo de una visión conspirativa; caracterizar correctamente los regímenes que han sido derrocados, especialmente el de Libia, y trazar las perspectivas para el movimiento, son nuestros objetivos. La revista se cierra con el texto de León Trotsky *Tres concepciones de la revolución rusa*.



Galicia: exitosa campaña de actos públicos

Una alternativa marxista a la crisis capitalista

Entre los días 1 y 6 de febrero los marxistas de EL MILITANTE y los compañeros del Sindicato de Estudiantes organizamos una serie de actos públicos bajo el título de "Una alternativa marxista a la crisis capitalista". Los actos se celebraron en las siguientes ciudades: Santiago de Compostela, Vigo, Ferrol, Lugo y A Coruña, reflejando la creciente implantación de ambas organizaciones en Galicia. Más de 120 personas, estudiantes tanto de enseñanza media como de universidad y trabajadores de distintos sectores, asistieron a las cinco charlas. Muchos de los asistentes felicitaron a los organizadores y les expresaron su acuerdo con las ideas defendidas.

Los ponentes explicaron de forma didáctica y profunda los orígenes de la crisis, el período histórico en el que nos encontramos, el auge internacional de la lucha de clases que vivimos y la necesidad

de luchar por una alternativa genuinamente socialista en el seno de las organizaciones de la clase obrera. Las condiciones objetivas para que una alternativa anticapitalista ganase un apoyo de millones, aquí y ahora, son excepcionales, si los dirigentes sindicales abrazasen ese programa. Por eso, organizar a los trabajadores más combativos dentro de los sindicatos y armarlos políticamente, es la tarea más importante en estos momentos.

El debate reflejó el deseo de buena parte de los asistentes por profundizar en aspectos clave, tales como el funcionamiento de una economía planificada, el proceso de toma de conciencia, cómo luchar contra la burocracia sindical, etc., La crítica a la actuación de los dirigentes políticos y sindicales de las organizaciones mayoritarias de la izquierda fue una constante en las intervenciones de los asistentes.



Al finalizar los actos, un buen número de participantes dejaron sus datos, tanto para conocer más en profundidad las ideas de la Corriente Marxista EL MILITANTE como para afiliarse al Sindicato de Estudiantes.

IX Setmana de Marxisme 28 de febrero ▶ 1 de marzo Valencia

La Facultat de Filologia de Valencia (Avda. Blasco Ibáñez 32, metro Facultats, salida Història) será escenario de debates atractivos para todo aquel que se proponga luchar contra el capitalismo. Los actos, todos de 19:00 a 20:45 horas, serán los siguientes:

MARTES 28 DE FEBRERO

Pasado, presente y futuro de Cuba.

¿Hacia dónde va la Revolución Cubana?

Hablarán Antonio Parrilla, de la Associació Valenciana d'Amistat amb Cuba José Martí, y Ulises Benito, de la Fundación Federico Engels. En la Sala de Juntas.

MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO

Europa, crisis económica

y lucha de clases

Introducción de Andreu Barber, de la Fundación Federico Engels. En el Aula 201.

JUEVES 1 DE MARZO

Presentación de

Socialisme i nacionalisme

(selección de artículos del revolucionario marxista irlandés James Connolly, recién editada por la Fundación Federico Engels). Hablarán Gonçal Bravo, secretario general de la COS (Coordinadora Obrera Sindical) y Jordi Rosich, de la Fundación. En la Sala de Juntas.

Por otra parte, el sábado 3 de marzo, a las 19 horas, presentaremos el mismo libro de Connolly en el Casal Obrer i Popular Francesc Santamaría.

Animamos a todos a participar en la difusión de estas jornadas y en los propios actos.

El PP de Leganés desaloja al Sindicato de Estudiantes de su local en represalia por luchar en defensa de la educación pública

El pasado mes de octubre, sin ninguna notificación previa, Doña Concepción Pastor, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Leganés, ordenó cambiar el candado de la verja que da acceso al local del Sindicato de Estudiantes (SE) en dicha ciudad.

Denunciamos esta acción como un atropello perpetrado por personas cuyo único lenguaje es el del orden y mando, y el del intento de revancha, propio de las instituciones de la dictadura que hace más de 30 años nuestros padres consiguieron derribar. Y decimos revancha porque este desalojo se produce en medio de las luchas más importantes de los últimos años a favor de la educación pública y contra los ataques que contra ella está intentando implementar el gobierno de la Comunidad, también del PP, en las que el SE está jugando un importante papel. ¡El PP ataca al SE por luchar en defensa de la educación pública!

El local en cuestión es la casa del conserje del antiguo colegio Juan Ramón Jiménez. Esta instalación viene siendo utilizada por el SE desde hace casi 10 años y fue cedido por el Ayuntamiento (entonces dirigido por PSOE-IU), después del desalojo de los antiguos juzgados, edificio que fue ocupado, limpiado y abierto a la ciudadanía para actividades culturales, educativas, etc, por el SE, junto a otros colectivos. Esta labor contó con el apoyo y la participación de los vecinos y así fue reconocido por el entonces equipo de gobierno.

Falsa excusa e intento de dividirnos

El PP ha puesto como excusa que dicho colegio ha sido cedido al centro de atención a discapacitados Magerit, que fueron brutalmente expulsados, también por el PP, del edificio en el que se encontraban en Carabanchel y después de una dura lucha han conseguido ser realojados.

Esta excusa es falsa y demuestra la arbitrariedad con que actúa el PP. En primer lugar, porque el traslado del centro de discapacitados a este colegio es provisional hasta que finalicen las obras de rehabilitación de su edificio de siempre. Por otro lado, el Magerit está ocupando el colegio no la casa del conserje y además el AMPA del Magerit (a quién el PP dice que iría destinado el local del SE) quiere y necesita tener su local dentro del colegio, junto a las instalaciones en las que estarán sus hijos. Por otro lado, el AMPA del Magerit, ha manifestado no tener problema alguno en compartir dicho local con el Sindicato de Estudiantes, a lo que se ha opuesto frontalmente el PP.

Desde el SE hemos iniciado una campaña pública para dar a conocer este nuevo atropello, exigiendo la inmediata devolución del local para seguir desarrollando nuestra actividad. Este ataque es uno más de los muchos que vienen sufriendo organizaciones que luchan en defensa de la educación pública, como la FAPA Giner de los Ríos, expulsada hace unos años de su local de Leganés y denunciada por el PP, al calor de las movilizaciones del profesorado en Madrid, por sacar camisetas y otros materiales para financiar la lucha contra los recortes de Esperanza Aguirre.

De hecho este es el segundo intento por parte del PP de desalojarnos de nuestro local, algo que ya intentó en el año 2009, y que gracias a la solidaridad de miles de jóvenes y trabajadores a través de la campaña pública que llevamos a cabo, hizo que el PP finalmente retrocediera devolviéndonos nuestro local.

Hacemos de nuevo un llamamiento al conjunto de los jóvenes y trabajadores del Estado español para que envíen resoluciones de solidaridad rechazando esta nueva agresión del PP, respondiendo con contundencia frente a un nuevo intento de recortar nuestros derechos democráticos y apartar a las organizaciones que combatimos en defensa de un futuro digno para la juventud.

Firma y envía la Resolución de protesta

www.sindicatodeestudiantes.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1031:resolucion-de-apoyo-al-sindicato-de-estudiantes-contra-el-desalojo-de-su-local-en-leganes-por-parte-del-pp&catid=93:portada

16 de febrero

Sindicat d'Estudiants

El Conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, han aprobado un decreto-ley de recortes, de común acuerdo con la cúpula empresarial (Fabra se reunió de antemano para decidir sobre él). Este decreto, y decisiones posteriores, suponen el mayor ataque a los servicios públicos desde la transición [ver artículo de la página 13]. Y, por supuesto, el efecto sobre la enseñanza pública es demoledor.

Se recorta drásticamente los salarios de los profesores, de diferentes formas; el recorte implica cientos de euros mensuales, pueden llegar a ochocientos. A los interinos se les recorta un 33% de la jornada y el sueldo, despidiéndoles antes de las vacaciones para ahorrárselas. También se pierden diferentes conquistas sociales, como la cobertura salarial del 100% en todas las bajas laborales. Están proyectando el despido de interinos, que podría llegar a una cuarta parte de ellos, y para cubrir su trabajo pretenden aumentar la jornada lectiva a 3 horas. Esto es, más trabajo con menos manos, igual a sobrecarga de trabajo, saturación y caída de la calidad.

Mientras tanto, los continuos impagos de la Generalitat crean una asfixia financiera a todos los centros. Hasta el 25 de enero los centros públicos no cobraron el tercer trimestre de 2011, y aún se les debe el cuarto. De esta forma, hay decenas de institutos sin calefacción,

Huelga de estudiantes valencianos: ¡paremos los recortes!

luz, o los materiales más básicos: *toner* para la fotocopidora, tizas... En un colegio han pedido a los padres que sus niños lleven papel higiénico, en un ciclo de Prótesis Dental han hecho colecta entre los estudiantes para pagar el material de prácticas (dos mil euros), en una escuela de hostelería de Castellón quieren subrogar el contrato de limpieza (con el consiguiente despido de las nueve trabajadoras), obligando a los estudiantes a hacerse cargo de ella, y así un largo etcétera. No hay centro que no esté afectado. En muchos casos se han paralizado las actividades extraescolares, y las clases prácticas de FP. También los rectores han amenazado con cerrar la Universidad si no llegan los pagos de la Generalitat. Y el transporte escolar hará paro patronal si a mediados de febrero no cobra.

Profesores y estudiantes movilizados

Las ganas de responder a estos ataques son extraordinarias. Todos los días hay concentraciones frente a Conselleria (en el momento de escribir esto, es el turno de los directores de Primaria), manifestaciones (15.000 en Gandia), cortes de carreteras (200 estudiantes de Oliva en una, los profesores de Ciudad del Aprendiz en otra...), decenas de encierros los lunes y martes por la noche, y todo tipo de iniciativas. El movimiento está bastante organizado en el caso de los profesores, a través de los claustros, que en muchos casos se

han coordinado a nivel de barrios o localidades.

Desde el Sindicat d'Estudiants pensamos que la única forma de parar esta agresión es un contundente plan de lucha que muestre, al menos, la misma determinación que tienen ellos. Un plan de menos a más que aproveche toda esta energía, concentrándola y unificándola. Creemos que los dirigentes de CCOO, UGT e Intersindical deben convocar, como primer paso, una huelga de toda la comunidad educativa (contando con la FAPA), y de todo el sector público. Los trabajadores públicos también están en movilización permanente; 300 médicos han demandado a los sindicatos, en una asamblea, la convocatoria de huelga. Este plan de lucha implica mucho más que poner una o varias fechas: significa realizar un plan masivo de asambleas, bien convocadas, donde debatir y decidir entre todos; significa una campaña no menos masiva de propaganda, dirigida a todos los usuarios, para fortalecer la evidente simpatía que ya existe a la lucha por parte de la mayoría de la población; significa también dar un mensaje muy claro a la Generalitat: o se retiran los recortes, o habrá huelga general.

Para implicar al máximo a los estudiantes en esta lucha, y presionar a los dirigentes sindicales en el sentido explicado, convocamos huelga el jueves 16, con manifestaciones en Valencia (12 horas, Facultad de Historia) y Castellón (12 horas, Pza. de las Aulas).

¡Es la hora de la lucha!

El gobierno redobla la ofensiva contra la enseñanza pública

Ministro de Educación: 'La educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad'

Sindicato de Estudiantes

En sintonía con los planes generales del gobierno del PP, en el terreno educativo, José Ignacio Wert, nuevo ministro de Educación, ha manifestado claramente su intención de profundizar el desmantelamiento de la escuela pública en todo el Estado, como vienen haciendo las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Así se desprende de las declaraciones en las que dice textualmente que "la educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad". Por si esto fuera poco, el nuevo ministro ha planteado que "hay que centrarse en la 'calidad', dando a entender que "público" y "de calidad" son conceptos antagónicos.

Las medidas anunciadas hasta ahora son la extensión del bachillerato y de la FP de grado medio a tres años, eliminando 4º de la ESO, y la supresión de la convocatoria de plazas de profesores para este año. Ambas medidas suponen una agresión clarísima contra la enseñanza pública. En primer lugar, respecto a la ampliación del bachillerato (o la FP de grado medio) a tres años, la derecha retoma su vieja aspiración de segregar a los estudiantes a través de itinerarios, obligando a los jóvenes a elegir entre la universidad y la FP a los quince años. Además, siendo obligatoria la educación hasta los 16 años, se abre la puerta a la concertación del bachillerato, un jugoso pastel para la patronal de la privada-concertada.

Respecto a la segunda propuesta del ministro de Educación, llueve sobre mojado. Después del anuncio de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP —como Castilla - La Mancha y Madrid— de despedir profesores interinos, ahora se da una vuelta de tuerca no cubriendo las plazas vacantes producto de las jubilaciones. Dichas medidas no harán otra cosa que alimentar el fracaso escolar, al reducir el número de profesores en uno de los cursos con mayor incremento del alumnado. En definitiva, estamos ante una nueva fase del proceso de desmantelamiento de la escuela pública. Un camino que, en comunidades gobernadas por la derecha como Madrid, lleva mucho trecho recorrido, provocando que en la actualidad existan 488 centros privados y privados concertados en Secundaria frente a 325 públicos.

En otro orden de cosas, la sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) por Educación Cívica y Constitucional, que, según ha dicho, estará "libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento ideológico", es un claro gesto hacia la base social más reaccionaria del PP. La derecha recoge el legado de la campaña orquestada por ellos mismos junto con la Iglesia católica hace unos años cuando, al calor de la aprobación de derechos como el de los matrimonios homosexuales, promovieron una campaña histórica convocando manifestaciones de carácter homófobo.

CCOO y UGT deben preparar un plan de lucha serio y contundente

Desde que comenzó la lucha contra los recortes en la enseñanza pública, desde el Sindicato de Estudiantes hemos planteado a los dirigentes de CCOO y UGT la necesidad de extender y radicalizar las movilizaciones, con un plan ascendente de lucha, alertando de que los ataques contra el profesorado eran el punto de partida de nuevos y más duros planes de ajuste, algo que ya se ha materializado. La realidad es que trabajadores del sector público y privado, parados, pensionistas, jóvenes..., todos somos víctimas y destinatarios de los planes de ajustes del gobierno. ¿Qué sentido tiene luchar separados por sectores o comunidades cuando los responsables los ataques son los mismos? Por ello, defendemos también la necesidad de unificar a todos los sectores en lucha, en la unidad esta la fuerza.

La clave para hacer frente a los ataques coordinados que estamos sufriendo los jóvenes y los trabajadores es que el movimiento obrero despliegue toda su fuerza en la calle. En esta coyuntura eso significa que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT rompan con la política de pactos y consenso que han seguido desde que estalló la crisis —y que únicamente ha cosechado fracasos y retrocesos—, comenzando por levantarse inmediatamente de la mesa de negociación con la patronal, y convocando ya una huelga general.

Inminente reforma laboral: Horas decisivas para la clase trabajadora

Los dirigentes de CCOO y UGT firman con la CEOE un acuerdo lesivo para los intereses de los trabajadores

David Bernardo Nevado
Afilado a CGT · Málaga

En vez de combatir la tesis, defendida machaconamente por la derecha y los capitalistas, de que la salida de la crisis sólo puede venir de la mano de más moderación salarial, más flexibilidad y pérdidas de derechos de los trabajadores, con la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con la CEOE el pasado 25 de enero los dirigentes de UGT y CCOO han hecho suyos todos esos falsos argumentos.

Aunque el texto no tiene relevancia jurídica alguna sí tiene una gran importancia político-sindical, en el sentido de hacer una recomendación a tres años de las líneas generales que deben marcar la negociación colectiva en las diferentes ramas y sectores. El pacto, en su preámbulo, contiene frases clarificadoras del pensamiento de los firmantes, como la siguiente: "El mayor crecimiento de los precios interiores y los salarios nominales en España en relación con los países de la zona euro y del resto de la UE han sido un elemento determinante en la pérdida de competitividad de la economía española". Realmente, sólo se puede decir que es increíble que unos dirigentes sindicales acepten sin más esta tesis interesada de los empresarios. El argumento de que son los salarios los principales responsables de la subida de precios se derrumba ante el más mínimo contraste, basta examinar los datos proporcionados por el mismo Instituto Nacional de Estadística (INE) que para el periodo 2001-2009 refleja que los precios (IPC) crecieron en un 31,6%, esto sin incluir la disparatada subida de la vivienda; mientras el salario medio sólo lo hizo en un 13,9%, casi 20 puntos de diferencia que refleja el descomunal excedente acumulado para los beneficios empresariales. Asimismo la misma UE, a través de Eurostat, muestra por ejemplo que el salario mínimo español es de los más bajos de Europa, por debajo incluso de Grecia. En el Estado español, el SMI se encuentra en 641 euros (congelado por el PP nada más entrar en el gobierno), mientras en Grecia está en 739 euros, Francia en 1.365 euros o Irlanda en 1.499 euros. Igualmente, según la misma agencia europea, el salario medio español (22.500 euros) también es de los más bajos de Europa y un 20% por debajo de la media europea, teniendo en cuenta además que el salario medio no refleja la mayor parte de los salarios, siendo el más frecuente el de 15.500 euros.

Siguiendo en sus equívocos, los firmantes continúan: "la economía española necesita mejorar su cuota de mercado nacional e internacional, es decir, mejorar las exportaciones y reducir las importaciones, para de esta forma conseguir un uso más óptimo de la capacidad productiva instalada e incrementar el empleo". Seguidamente nos dan sus recetas para conseguir esto: "... es imprescindible un acuerdo social sobre precios y rentas (salarios y beneficios distribuidos) (...) La economía española necesita, a corto plazo, que los precios crezcan por debajo de la media comunitaria". Aparentemente perfecto, impecable, pero los susodichos firmantes nos ocultan que los precios en el mercado mundial nos vienen dados por un valor determinado (compuesto por múltiples factores históricos, monopolios, capacidad tecnológica, tipos de cambio, etc.) que explican que países como Alemania tengan un saldo comer-



cial positivo con un salario medio que dobla al español. Los salarios de un país no determinan los precios en el mercado mundial; por consiguiente, una reducción salarial, sin más, va directamente a incrementar los beneficios empresariales.

Al final, los firmantes del pacto antisocial reconocen solapadamente que la inversión que se derivaría de la moderación salarial es sólo una hipótesis, cuando dicen: "la recuperación de los márgenes económicos debe servir al aumento de las inversiones (...)". Así, construyen un castillo de naipes al suponer que el aumento de los beneficios a costa de los trabajadores va a llevar consigo un aumento de la inversión, pasando por alto el actual contexto de crisis del capitalismo mundial, la saturación de los mercados y la sobreproducción generalizada, de cuyo vivo ejemplo es la economía china que está viendo como disminuye el crecimiento de su economía por la dificultad para colocar sus pro-

ductos en los mercados mundiales. Unos beneficios que, en el menos malo de los casos, sólo van a ir a pagar la gigantesca deuda de las empresas españolas: 1,29 billones de euros, un 130% del PIB (la mayor del mundo), y en el peor de los casos, a seguir engordando las cuentas bancarias de empresarios y banqueros en Suiza y los paraísos fiscales como nos tiene acostumbrados la parasitaria burguesía española.

Beneficios para la patronal, riesgos y pérdidas para los trabajadores

Las contradicciones de los firmantes se detectan en cuanto nos adentramos en el contenido del pacto. En el mismo, todas y cada una de las medidas y cláusulas obligacionales van dirigidas a los salarios y las condiciones laborales, mientras para los empresarios y sobre el control de los precios sólo existen recomendaciones y buenas intenciones. Unas obligaciones que demuestran que la creación de empleo no es el objetivo de los firmantes, sino el aumentar los márgenes empresariales. En el pacto se establece lo siguiente:

- Prioridad de los convenios de empresa. Los firmantes dan por buena la contrarreforma laboral anterior y ordenan que aspectos sustanciales como el tiempo de trabajo, las funciones y el salario sean regulados a nivel de empresa. Asimismo, impulsan las medidas de arbitraje para imponer en la empresa la rebaja de condiciones laborales, desactivando la vigencia de los convenios colectivos en caso de desacuerdo de las partes.
- Se reserva un 10% de la jornada anual a conveniencia del empresario, para que la distribuya como le plazca en el calendario laboral, así como una bolsa de 40 horas para poder cambiar el calendario acordado previamente. Asimismo, se establece que en la negociación colectiva se le dé todavía más poder al empresario para superar ese 10% de distribución irregular del tiempo de trabajo, impulsando las medidas de arbitraje de la contrarreforma laboral.

PASA A LA PÁGINA 5

Análisis de la reforma laboral en www.elmilitante.net

Es muy probable que el PP apruebe la reforma laboral en el Consejo de Ministros del 10 de febrero o en los días siguientes, cuando ya esté en la calle este número de EL MILITANTE. Publicaremos nuestro análisis en la web lo más rápido posible.

Únete a la corriente marxista agrupada en el periódico obrero EL MILITANTE y lucha con nosotros por una alternativa socialista:

- Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. Contra el desempleo: reparto del trabajo.
- Jubilación a los 60 años con el 100% del salario con contratos de relevo, manteniendo la estabilidad en el empleo.
- No a la precariedad laboral. Fijo a los quince días. Por trabajo periódico, contratos de fijos discontinuos.
- Salario Mínimo de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años.
- No a la reforma laboral.
- Defensa de la empresa pública. No a las privatizaciones. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los puestos de trabajo.
- No a la discriminación de la mujer trabajadora. A igual trabajo, igual salario.
- Defensa de la sanidad pública. No a la privatización.
- Por una red educativa pública, única, laica, gratuita, científica y de calidad. 7% del PIB para la educación pública.
- No a los recortes en el subsidio de desempleo.
- Un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al SMI hasta encontrar trabajo.
- Vivienda digna. Nacionalización de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer la construcción de un millón de viviendas sociales en los próximos cuatro años.
- Ninguna restricción en nuestros derechos de expresión, reunión y huelga. No a la Ley de Partidos.
- Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Por una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas.
- Depuración de los elementos reaccionarios del aparato del Estado. Control por parte de los sindicatos obreros de las academias militares y de policía.
- Ninguna discriminación en el empleo por edad, sexo o nacionalidad. Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes.
- Expropiación de las empresas que se declaren en quiebra o en suspensión de pagos, bajo control obrero.
- Nacionalización de la banca, la tierra y los monopolios sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, y bajo control obrero. De esta forma se podría planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.

SUSCRÍBETE

Estado español	Normal	Ayuda	Resto del mundo	Normal	Ayuda
<input type="checkbox"/> 6 números	12 €	23 €	<input type="checkbox"/> 6 números	23 €	35 €
<input type="checkbox"/> 12 números	23 €	35 €	<input type="checkbox"/> 12 números	35 €	47 €

Nombre _____
 Calle _____
 Localidad _____
 Provincia _____ CP _____
 Teléfono _____ E-mail _____

Envía un Giro Postal al Apartado de Correos 5.200, 28080 Madrid o comunícame con nosotros a través del formulario de suscripción que aparece en nuestra web

CONTACTA CON NOSOTROS

ANDALUCÍA

· Cádiz 678 940 435
 · Granada 616 893 592
 · Málaga 952 276 563
 · Sevilla 954 222 261

ARAGÓN

· Zaragoza 697 338 376

ASTURIAS

..... 985 550 933

CASTILLA-LA MANCHA

· Guadalajara 949 201 025
 · Puertollano 650 837 265
 · Toledo 699 956 847

CASTILLA Y LEÓN

· Salamanca 653 699 755

CATALUNYA

· Barcelona 933 248 325

· Girona 657 212 367
 · Tarragona 660 721 075

EUSKAL HERRIA

· Álava 945 231 202
 · Guipúzcoa 625 707 798
 · Pamplona 635 919 738
 · Vizcaya 944 790 381

GALICIA

· Compostela 679 500 266
 · Coruña 600 810 516
 · Ferrol 626 746 950
 · Vigo 636 217 248

MADRID

..... 914 280 248

MALLORCA

..... 669 262 800

PAÍS VALENCIA

..... 961 339 120

www.elmilitante.net — elmilitante@elmilitante.net